

CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS



INFORME DE VERIFICACIÓN DE SITUACIÓN EN SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, A PARTIR DE LA IMPLANTACIÓN DEL ESTADO DE PREVENCIÓN CONTENIDO EN EL ACUERDO GUBERNATIVO 6-2014

Guatemala, 28 de septiembre de 2014

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe es producido por el equipo de la CDH desplazado a verificar los hechos y situación en San Juan Sacatepéquez, la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2014.

En San Juan Sacatepéquez prevalece un clima de tensión que en la fecha indicada escaló a un conflicto con manifestaciones de violencia extrema. De acuerdo con los informes hay ocho personas fallecidas, cuatro personas heridas y varias familias desplazadas, además de la destrucción de cinco viviendas y cinco vehículos automotor.

La tragedia del 19 y 20, derivó en que el gobierno emitió el Decreto 6-2014 que impune estado de prevención (primer grado del estado de excepción) en todo el municipio aunque con ocupación territorial por ejército y Policía Nacional Civil en cuatro caseríos: Los Pajoques (lugar de los hechos), Santa Fe Ocaña y Los Pilares I y II.

Los hechos:

En diversas entrevistas realizadas por la delegación de la Convergencia por los Derechos Humanos, entre las que se incluye a familiares de las personas muertas entre el viernes 19 y sábado 20 de septiembre, así como a Alcaldes Auxiliares y comunitarios de diversas comunidades se logra establecer una línea de tiempo que se detalla a continuación.

El viernes 19 aproximadamente a las 21:30 horas tres jóvenes (uno mayor de edad y dos menores de edad) venían caminando hacia su casa, el mayor de ellos luego de culminar su jornada laboral en una maquila de San Pedro Sacatepéquez se reúne con sus dos hermanos menores de edad y caminan, cuando de pronto aparece un grupo de alrededor de 15 personas, quienes les alumbran con linterna y sin intermediar palabras les disparan, producto de lo cual cayó el mayor de edad. Los otros dos hermanos menores de edad, huyen de la escena, uno de los cuales llega hasta la casa del Alcalde Auxiliar. El Alcalde Auxiliar al ver a los dos niños heridos acude al lugar donde estos le señalan que esta su hermano. El lugar es un callejón del Caserío Los Pajoques donde se encuentra tirado el hermano mayor y observa que tiene un impacto de arma de fuego en el pecho, frente a lo cual corre a solicitar un vehículo para que puedan llevar al joven a que le atiendan médicaamente.

Los otros dos hermanos, menores de edad están heridos, uno en el brazo izquierdo y el otro en un dedo de su mano. Por ese motivo, al encontrar vehículo que los traslade, suben al mayor con herida en el pecho y a los otros dos quienes son acompañados por su señor padre (José Dolores Pajoc Pirir). El joven herido con aparente proyectil de escopeta no logra llegar con vida al hospital dado que muere en el camino.

Al mismo tiempo, vecinos de Los Pajoques, al escuchar la detonación de armas de fuego y los gritos de los hermanos menores del, hasta ese momento, herido, salen de sus casas y llegan al lugar de los hechos. Mientras el vehículo que transportará a los heridos llega, uno de ellos identifica a quien presuntamente les disparó. El supuesto agresor responde al nombre de Felipe Patzan y aparentemente labora para Cementos Progreso S.A.

En este momento se hacen presentes dos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes levantan el parte policial de los hechos acontecidos y se retiran del lugar, en tanto que al momento se reportan personas heridas. Aparentemente una de las oficiales presentes en la escena es una mujer que sería la responsable de la Sub-Estación 16-71 de San Juan Sacatepéquez de nombre Blanca Asencio. Luego de esto, ya pasadas las 22:30 horas la población concentrada se entera que el joven ha muerto, motivo que da inicio a la búsqueda de los aparentes responsables de la muerte y a quienes refieren como los trabajadores de la empresa cementera.

Los Alcaldes comunitarios y el Alcalde Auxiliar del caserío Los Pajoques llevan cabo varias acciones encaminadas a que la Policía Nacional Civil –PNC- se haga presente al lugar de los hechos, ya que Felipe Patzán y otros empleados armados se encuentran en la casa de Marcelo Pajoc y la población ha logrado rodear dicha vivienda. En ese sentido, las autoridades comunitarias realizan varias llamadas al teléfono de emergencias de la PNC (110). Estas llamadas las hacen desde el número telefónico 5761-8842. Ante la falta de atención pese a las reiteradas llamadas a la Policía, los alcaldes auxiliares llaman en varias oportunidades a las estaciones policiales de Mixco y San Pedro Sacatepéquez -en tanto municipios cercanos a San Juan Sacatepéquez-, las cuales también resultan infructuosas.

Paralelamente a estos hechos de solicitud de auxilio por parte de las autoridades comunitarias de Los Pajoques, vecinos de la comunidad Santa Fe Ocaña (la cual se encuentra justo a la par de Los Pajoques) se dirigen al centro de San Juan Sacatepéquez para pedir el auxilio en la Sub Estación 16-71, llamado al cual tampoco acude la PNC. Cabe señalar que comunitarios de Santa Fe Ocaña refieren que al hacerse presentes en dicha sub estación se encontraba en el lugar una persona de nombre Bernardo Tzen quien aparentemente es trabajador de la empresa cementera y a quien responsabilizan de que la PNC decidiera no llegar a la comunidad Los Pajoques.

Estos llamados reiterados de la comunidad a la Policía Nacional Civil jamás son atendidos como corresponde por parte de la misma, lo cual provoca en medio de la desesperación de las autoridades comunitarias y pobladores, realizar una llamada a un Policía que era habitante de la comunidad y que se encontraba asignado a un departamento distinto. Este elemento policial también realiza llamadas sin que rindan el fruto deseado.

Cabe señalar que la PNC mantuvo una excusa para no llegar a la Comunidad Los Pajoques pues argumentó que en un caserío cercano la misma, incluso en los ingresos, había bloqueos por parte de los pobladores. En una de las llamadas intercambiadas con la oficial a cargo de la sub Estación de San Juan Sacatepéquez, esta les dijo que no podían pasar porque en el caserío previo a llegar a Los Pajoques, se encontraba la talanquera cerrada. Frente a este hecho la alcaldía auxiliar se comunicó con sus homólogos en dicho lugar y estos negaron que la talanquera estuviera cerrada. Circunstancia que deja en entredicho el pretexto policial para no acudir al auxilio de la comunidad.

Estos esfuerzos no sólo provienen de comunitarios y autoridades locales, sino también se describe que los supuestos trabajadores de la empresa cementera, realizan llamadas a la Policía Nacional Civil con el mismo propósito. Así mismo, las personas que se encontraban dentro de la casa de Marcelo Pajoc llaman a la Procuraduría de los Derechos Humanos y estos le refieren que de igual manera se comunicarán con la PNC.

Paralelamente a estos insistentes llamados de auxilio, un grupo de la población enfurecida ha destruido varias casas, aparentemente todas propiedad de trabajadores de la empresa cementera, en distintos puntos de la Comunidad Los Pajoques. También ha incendido un camión, dos pick ups y un vehículo sedan, aparentemente propiedad de la familia de Marcelo Pajoc.

Esas circunstancias se estaban desarrollando cuando el señor Justo Raxón quien se encontraba en su vivienda, junto a su esposa y tres hijos menores de edad, sale aproximadamente a la media noche a ver a sus sobrinos, quienes viven cerca de la casa de Marcelo Pajoc donde se están dando los hechos de violencia, para verificar la situación de estos. Otra vez suenan disparos y el señor Justo Raxón muere por un disparo en la cabeza. Este hecho exacerba aún más los ánimos de la población en tanto que presumen que los disparos vienen de dentro de la vivienda de Marcelo Pajoc.

Luego de estos hechos y al filo de las 6:00 de la mañana del sábado la población enardecida logra acceso a la vivienda donde se encontraban Marcelo Pajoc y su familia, Felipe Patzán y otros supuestos trabajadores de la empresa cementera. Al lograr el acceso estas personas son asesinadas por la turba, con excepción de Felipe Patzán quien, de acuerdo con un relato realizado por comunitarios, fue salvado por una persona de nombre Carlos Guamuch, quien interviene frente a la turba y logra que Felipe huya del lugar de los hechos. Según relatos de alcaldes auxiliares de Los Pajoques, hoy Felipe Patzán no solo acusa a quien aparentemente le salvo la vida, de dirigir los hechos del zafarrancho, sino que además acompaña a la Policía Nacional Civil, con una chumpa de estos, señalando viviendas e identificando personas.

Pese a los insistentes llamados durante la crisis, desde las nueve de la noche del viernes, la Policía Nacional Civil no llega sino hasta pasada las 10:00 am del sábado. Al medio día del sábado, la información disponible hablaba de siete personas fallecidas, dos del movimiento de resistencia y cinco del grupo de apoyo a la empresa cementera.

Conclusiones y recomendaciones:

- La conflictividad social ha escalado permanentemente sin que el Estado contribuya a procurar un clima de transformación del conflicto en condiciones de equidad para todas las partes involucradas.
- Resultado de ese escalamiento son los hechos trágicos que representaron el asesinato de dos jóvenes, heridas a otros, la masacre de un núcleo familiar, el desplazamiento forzado de por lo menos un núcleo familiar (niñas y niños incluidos), así como la pérdida de su patrimonio.
- Esa falta de atención y de cumplimiento de las responsabilidades del Estado se expresan en la falta de investigación de las denuncias presentadas por las comunidades afectadas, sobre el rol de personas armadas que intimidan a las y los pobladores, así como la relación de las mismas con la empresa cementera cuya llegada coincide con el inicio de la conflictividad.
- El escalamiento de la conflictividad pudo evitarse si el Estado hubiese cumplido su papel y aportado a la solución justa y no parcializada de la problemática. La criminalización de la

resistencia pacífica es un factor que alimenta la conflictividad social. El recurso exclusivo de la ley contra un actor en desventaja de poder, cuestiona la legitimidad del actor estatal.

- El Estado tampoco ha analizado la responsabilidad de la compañía de cemento y las denuncias constantes sobre acciones encaminadas a dividir a la comunidad.
- La tragedia del 19 y 20 de septiembre pudo haberse evitado. El Estado de Guatemala y sus instituciones involucradas directa o indirectamente en la problemática, a lo largo de los años, tienen responsabilidad en los hechos sucedidos. En el caso concreto de los hechos trágicos, la Policía Nacional Civil (PNC), sus autoridades y el Ministerio de Gobernación, incumplieron sus deberes y al negar auxilio a todas las partes que lo pidieron, tiene responsabilidad en los sucesos.
- El Estado y sus instituciones continúan actuando con parcialidad en los hechos. No hay disposición ni siquiera a identificar a las víctimas de todos lados. Las autoridades han resaltado la tragedia vivida por la familia Pajoc Matz, pero han invisibilizado las otras muertes ocurridas, lo cual traslada un mensaje preocupante sobre víctimas de distintos niveles y eleva el nivel de ilegitimidad de la institucionalidad del Estado.
- Los hallazgos de túneles y depósitos de armas en la vivienda de Marcelo Pajoc, desde donde se produjeron los disparos, es un indicador de la existencia de grupos paramilitares que operaban integrados por personal de la empresa cementera.
- El tejido social en las comunidades afectadas está dañado debido a las prácticas de cooptación monetaria y de armamentismo, promovidas por la empresa cementera, un actor que ha utilizado sus recursos para estimular la crisis y la confrontación.
- A la Convergencia por los Derechos Humanos. Hacer público este informe, a fin de dar a conocer una versión completa y no parcializada de los hechos ni alimentadora del discurso de odio y estigmatización social.
- Continuar el monitoreo de las acciones del Estado en el marco del estado de excepción. Auditarse y fiscalizar el cumplimiento de los estándares en materia de Derechos Humanos.
- Hacer requerimientos de Acceso a la Información para determinar con precisión las responsabilidades en materia de negación de auxilio.
- Investigar los patrones de comportamiento provocador y estímulo de la conflictividad en espacios de tensión social, a fin de identificar patrones que perfilen actores comprometidos en la generación de violencia.

INTRODUCCIÓN

La Convergencia por los Derechos Humanos (CDH), es una alianza de once organizaciones, con sede en Guatemala, que defienden el pleno ejercicio de los Derechos Humanos. La integran: el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA); el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS); el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH); El Refugio de la Niñez; el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP); el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG); la asociación Seguridad en Democracia (SEDEM); la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA); la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).

Esta alianza, con más de diez años de funcionamiento, impulsa y promueve la agenda de Derechos Humanos y vigila el cumplimiento de los mismos. Parte de su accionar conjunto lo representan las misiones de verificación o comprobación *in situ*, cuando durante eventos extraordinarios, es necesario obtener una visión imparcial de los hechos y facilitar la presentación de sus versiones a las actoras y actores que no tienen acceso a los medios.

La CDH ya realizó misiones entre las que puede mencionar, Livingston, Izabal, derivado de la intervención de ejército y policía de Guatemala en rescate de turistas europeos, acción en la cual fue ejecutado un campesino, en 2008; en El Naranjo, Petén, durante desalojo a comunidades, en donde murieron dos personas, en 2008; en Honduras, durante el golpe de Estado en 2010; Santa Elena Barillas, Huehuetenango, por el asesinato de un miembro de la comunidad, en mayo 2013; en Nentón, Huehuetenango, en junio 2013.

En esta oportunidad, se desplaza una delegación de la CDH, conformada por directores y miembros de sus equipos de trabajo para establecer por investigación propia, los hechos acontecidos en aldea Los Pajoques la noche del 19 y madrugada del 20 de septiembre de 2014. De igual forma, para verificar el esquema, arquitectura y proceso funcional de las fuerzas de seguridad desplazadas al sitio en el marco del estado de excepción decretado por el gobierno a partir del lunes 22 de los corrientes.

Resultado de esta visita es el reporte que se presenta a continuación. El mismo incluye una parte de información general sobre la composición de la delegación y el método empleado en la actividad asignada.

Una sinopsis sobre los antecedentes de la situación y escalamiento de la conflictividad en San Juan Sacatepéquez a partir de 2006, cuando se inicia el proceso de instalación de una planta procesadora de cemento de la empresa Cementos Progreso.

Una descripción de los hechos, a partir de la información recabada. Esta se acompaña con una infografía que expone el posible desarrollo de los acontecimientos, así como una línea de tiempo de los sucesos. Otro apartado incluye la identificación de los derechos vulnerados así como la probable responsabilidad por los mismos. Conclusiones sobre el fenómeno observado, con base en la información recabada tanto

de antecedentes como de los acontecimientos. Una propuesta de recomendaciones al respecto, derivadas de las conclusiones. Un apartado con documentos anexos considerados importantes en el análisis.

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Misión de verificación.¹

Objetivo: Monitorear e investigar los hechos que sirvieron para justificar el Acuerdo Gubernativo 8-2014 (Estado de excepción) en San Juan Sacatepéquez y presentar un informe con los resultados del análisis.

El grupo se integró con dos equipos. Uno (A) formado por personal de CALDH y UNAMG. Este equipo estuvo acompañado por una delegación de Brigadas de Paz Internacionales (PBI, por sus siglas en inglés), quienes asistieron en calidad de observación a nuestra misión (en anexo ver su informe al respecto). El otro equipo (B) lo integraron UDEFEGUA, CIIDH y SEDEM.

1.2 Metodología empleada:

En virtud de las condiciones del terreno y características de vehículos, el vehículo del equipo (A), fue asignado para asistir a las comunidades de Santa Fe Ocaña y Pilares I y II. El equipo B fue asignado a desplazarse a Los Pajoques, lugar de los hechos sangrientos.

Previo al desplazamiento, los equipos se reunieron en la cabecera del municipio para acordar los detalles del proceso. Ambos equipos constataron a su paso por San Pedro Sacatepéquez el despliegue de unidades de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC) y carro patrullas de la Comisaría de PNC del departamento de Zacapa, al Oriente del país.

Durante el desayuno, momento de organización del proceso, el equipo acordó el desplazamiento ya indicado. Estableció contacto telefónico con el responsable de Mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) quien indicó que se encontraba fuera del país. Proporcionó los números de teléfono y nombres de los responsables de las unidades de la PDH desplazadas en la zona (Giovani Guzmán y Marvin Sicán).

El grupo contactó al señor Giovanni Guzmán. Al señor Guzmán se le informó que el grupo de la CDH se encontraba en el área realizando verificación. Guzmán informó que se encontraba junto al Jefe de Auxiliaturas de la PDH, señor Carlos Barquín. (Ver desarrollo de entrevista telefónica en apartado sobre los hechos).

Luego de contactar al PDH, el grupo acordó que en cada lugar se ubicaría al responsable del despliegue de fuerzas de seguridad, para informar de la presencia de la delegación y obtener la información de las autoridades presentes.

¹ Decisión adoptada por CDH en reunión de emergencia el lunes 22 de los corrientes.

Cada equipo debía también entrevistar a la mayor cantidad posible de actores en cada lugar. Se estableció un punto de encuentro al final del día y mecanismos de chequeo mutuo durante la jornada. Cada equipo contaba con grabadora y cámara fotográfica para documentar lo que fuera necesario.

Se acordó una reunión al final del proceso, antes de retornar. En esa reunión final se revisó lo realizado por cada equipo, se analizaron las dificultades encontradas y se acordó el proceso de reunión y sistematización de los datos recabados. El grupo acordó reunirse en pleno el jueves 25 para la preparación del informe final a entregar a la CDH.

En el encuentro general se recogieron en detalle los elementos recabados por cada equipo, así como el informe de observación realizado por el equipo de PBI. Se distribuyó al equipo el informe de la empresa Cementos Progreso y otros documentos relativos a denuncias previas así como informe de PNC en hospital de Antigua para atención de heridos en la primera acción del viernes 19.

Con base en la información recabada por el conjunto se inició la construcción de la probable línea del tiempo y se elaboró una infografía sobre el posible desenvolvimiento de los hechos, a partir de la información disponible.

Se hizo acopio de los documentos de referencia y se acordó el esquema general del informe y se distribuyó responsabilidades para su integración. Con base en estos elementos se presentó el informe general a la CDH en reunión extraordinaria el jueves 25 y se acordó entregar el domingo 28 la versión final.

2. CONTEXTO

2.1 Información general de San Juan Sacatepéquez.

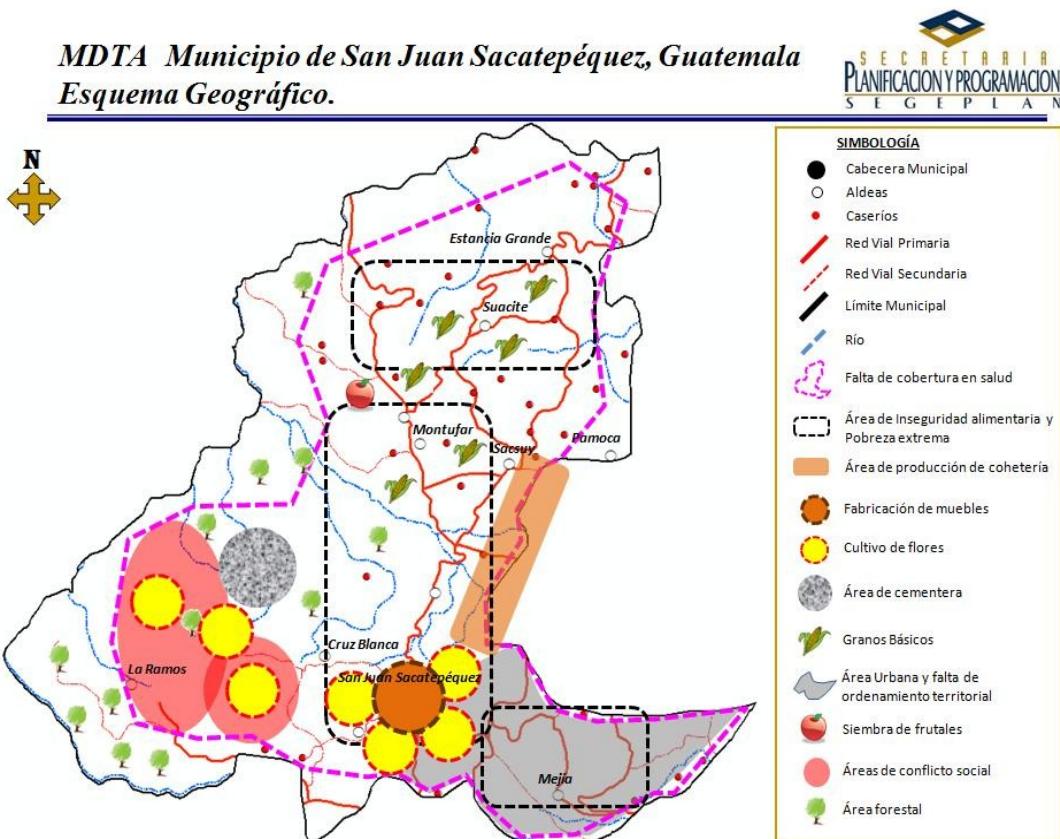
San Juan Sacatepéquez es un municipio del departamento de Guatemala, en el centro del país, por lo que forma parte de la llamada área de influencia metropolitana. Está ubicado a 31 kilómetros al occidente de la ciudad capital. Su población, estimada en 193 mil habitantes, según el último censo realizado, se distribuye en la superficie de 242 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional aproximada de 792 habitantes por kilómetro cuadrado.

Su economía tiene como fuente principal el trabajo agrícola en el cultivo de flores y frutas (manzana, membrillo, pera, durazno, jocote, entre otros), aunque también hay ganadería y avicultura en menor escala. La floricultura tiene un rol importante en la economía. Cultivan flores que se exportan a Estados Unidos, México, Europa y Asia. También tiene una importante industria en muebles y artesanía.

La fundación del municipio se produjo el 3 de febrero de 1752, fecha en la cual los habitantes, fundamentalmente del pueblo maya kaqchiquel, compraron a la corona española, 480 caballerías y 38 manzanas.

Se divide en 13 aldeas (Camino Viejo a San Pedro, Loma Alta, Cruz Blanca, Comunidad de Zet, Sajcavillá, Cerro Alto, Sacsuy, Pachalí, Montufar, Suacité, Llano de la Virgen, Comunidad de Ruiz, y Lo de Mejía) y 125 caseríos, colonias y fincas agrícolas.

Imagen 1
Croquis de San Juan Sacatepéquez



Fuente: Secretaría General de Planificación Económica

2.2 El inicio de las tensiones. Del problema al conflicto.

Hace aproximadamente ocho años se conoce del proyecto empresarial por construir una nueva planta fabricante de cemento en terrenos de varios caseríos del municipio. Esta planta pertenece a la empresa Cementos Progreso (CEMPRO), cuyos principales accionistas son las familias Novella y Torrebiarte.

Esta compañía ha ostentado, desde su fundación, el monopolio de la producción, comercialización y distribución de cemento en todo el país. Su relación cercana con el poder político le ha permitido gozar de protección económica por parte del Estado. Esta situación es la que garantiza la existencia del

monopolio de producción y comercialización de cemento. Por otra parte, en virtud del sentido monopólico de su cultura empresarial, deviene en el único proveedor del Estado en este material básico para la inversión en infraestructura.

Otro factor de cercanía con el poder son los casos de secuestro. La familia Novella ha sido también víctima de secuestro económico pues, en los años 70 y 90, dos miembros de la misma fueron secuestradas por organizaciones de la guerrilla insurgente. En 1976 Olga Novella Alvarado fue secuestrada y liberada dos meses después al parecer luego del pago de un rescate a la organización que la retenía.

En agosto de 1996, cuando se negociaba la firma de los Acuerdos de Paz, la señora Olga Alvarado de Novella estuvo secuestrada por más de un mes. El grupo que llevó a cabo dicha acción es la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), integrante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). La negociación para liberar a la señora de Novella, la realizó el gobierno de Guatemala directamente, a partir de la captura de dos integrantes del grupo secuestrador². La captura la realizó un comando especial denominado “comando antisecuestros”, del Estado Mayor Presidencial (EMP)³ en ese entonces presidido por el general Ricardo Bustamante⁴.

La privilegiada posición económica de la empresa CEMPRO, significa que es una clienta importante en publicidad en los medios de comunicación⁵. Esa circunstancia le hace tener una ventaja importante en materia de cobertura con respecto a grupos que adversan sus prácticas o intenciones empresariales, Tal el caso de las comunidades kaqchiqueles de San Juan Sacatepéquez, a quienes el espacio para informar su postura respecto del proyecto es infinitamente menor que el concedido a quienes favorecen la empresa o a la misma industria y sus voceros. Además del espacio reducido, las posibilidades de esclarecer posiciones son casi nulas pues, por o general, la versión de la empresa es la que ostenta el privilegio de aparecer en las notas informativas.

De tal suerte que en materia de gestión de la conflictividad relativa a la oposición comunitaria a la industria cementera, las posiciones en el ámbito de la negociación resultan abiertamente inequitativas. A tal grado que, hasta el momento de redactar el presente informe, no se conoce de la acción de actor alguno relacionado con procesos de diálogo que busque mejorar la situación de desventaja en la cual las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez podrían sentarse a negociar con la empresa CEMPRO.

En materia de gestión de conflictividad hay distintas escuelas. Unas, basadas en la visión anglosajona *per se* buscan gerenciar o administrar el conflicto como tal. Se enfocan en la solución inmediata de un asunto, independientemente de las relaciones o del entorno. En este criterio o escuela, priva el deseo de resolver un punto y avanzar en la intención de cumplir una meta. Si un actor es poderoso, logra imponer

². De acuerdo con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), en el Caso Ilustrativo 103, resultado de esta acción de rescate se produce la desaparición forzada de Juan José Cabrera Rodas (“Mincho”), capturado junto con Rafael Augusto Valdizón (“Isaías”).

³. En fecha reciente, durante las audiencias por el desbaratamiento de la red criminal dirigida por el capitán Byron Lima Oliva, convicto por la ejecución del Obispo Juan Gerardi, se supo de los vínculos de la familia Novella con dicho comando. Lima Oliva aseguró ante el juez que instruye el proceso que, la familia Novella le obsequió una casa como recompensa por haber logrado la liberación de la señora Olga de Novella.

⁴. En la actualidad, el general Bustamante, en situación de retiro, ocupa la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, responsable de diseñar la agenda nacional de seguridad en materia de riesgos y amenazas.

⁵. Nótese que un ingreso fundamental de las empresas periodísticas es la publicidad comercial. Más que la venta al detalle o por suscripción, la pauta publicitaria es la fuente principal de ganancias. El cerco publicitario ha sido un mecanismo empleado por gobiernos o entidades, para conseguir “prensa amigable” al posicionamiento del patrocinador.

su visión y su deseo. Se alcanza el propósito inicial que motivó el conflicto pero las relaciones quedan lastimadas y el tejido social, roto.

Otra escuela se enfoca en la transformación del conflicto. Esta, desarrollada entre otros por Jean Paul Lederach, parte del reconocimiento de que el conflicto puede ser positivo en tanto motor de cambio en un proceso determinado. Para ello, Lederach y sus seguidores destacan la importancia de entender las necesidades o intereses de las partes involucradas, escuchar y asegurar la nivelación de poderes de los grupos en la mesa de negociación.

Si se atiende un problema o conflicto desde esta perspectiva, esta escuela considera que es posible llegar a un proceso transformador que enriquezca la dinámica de las relaciones, garantice una aproximación a la paz y promueva un desarrollo efectivo. Cualquier actor externo solo podrá involucrarse si ambas partes están claras y dispuestas a aceptar su intervención y si le reconocen la legitimidad necesaria para llevar adelante el proceso. De lo contrario, se pierde la confianza, factor esencial en dicho proceso.

No obstante, en el tratamiento oficial de lo que ha sido la conflictividad en este municipio, lejos de constituirse en un actor que contribuya a la mediación, dados los elementos ya descritos, la figura gubernamental se ha constituido en un actor más que incrementa los niveles de poder de una de las partes (CEMPRO), en detrimento de la otra (las comunidades).

De hecho, resulta preocupante la actitud del Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP), una instancia gubernamental que ha tenido a su cargo la atención a este y otros procesos. En las propiedades del documento que contiene un comunicado que circuló sin firma pero que responsabiliza a varios liderazgos comunitarios de la tragedia del 20 de septiembre, sin mencionar los asesinatos del 19, se identifica como autor a SNDP-11.

Otros documentos ubicados en el sitio electrónico del SNDP tienen propiedades similares. Es decir, autoría con identificación SNDP más un guión y un número, el cual, según un experto informático entrevistado indica que correspondería al número de estación en la red de la entidad. De ser cierto el vínculo entre la entidad gubernamental responsable del diálogo y quien elaboró un comunicado que reproduce una única versión de los hechos, se estaría ante un actor que pretende ser mediador pero que en la práctica actúa en función de la más poderosa de las partes, en este conflicto escalado a la violencia.

Amén de que el Estado también incumple sus funciones de atención a la problemática, desde la perspectiva jurídica, cuando de conocer denuncias de las comunidades se trata. En tanto que la emplea como mecanismo de presión o represión en la defensa de los intereses del actor empresarial. Si bien no le corresponde hacer de árbitro, el Estado, por medio del SNDP se coloca como tal pero sin actuar en consecuencia, sumándose al torrente de conflictividad escalonada, tal y como se podrá observar en los antecedentes a la situación trágica del 19 y 20 de septiembre.

Antecedentes de la situación en San Juan Sacatepéquez por las operaciones de Cementos Progreso.

La situación de conflictividad se remonta al año 2006 cuando se hicieron evidentes las intenciones de Cementos Progreso (CEMPRO⁶) de iniciar operaciones en territorios de 12 comunidades maya-kaqchikeles del municipio de San Juan Sacatepéquez, por medio del proyecto de la planta cementera San Gabriel, misma que está en construcción desde 2013.

Dicho proyecto afecta la situación geográfica, vida y condiciones territoriales de un importante espacio del municipio. No obstante, se dio inicio a este sin haber consultado a las comunidades afectadas. De tal suerte que CEMPRO recurrió, apoyada en ese momento por el gobierno de Óscar Berger Perdomo de la Gran Alianza Nacional (GANA), a imponerlo. Por lo menos tres funcionarios públicos del gobierno de Berger estuvieron ligados abiertamente a esta empresa: Adela Camacho de Torrebiarte (quien fungió como Ministra de Gobernación)⁷, Luis Velásquez⁸ y Erick Aguirre, además de las relaciones históricas entre el ex Presidente de la República y los principales accionistas de CEMPRO como son las familias Novella y Torrebiarte.

Estos funcionarios continuaron vinculados a los sucesivos gobiernos de Álvaro Colom (Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-), así como en el actual de Otto Pérez Molina del Partido Patriota (PP). El actual presidente ha sido uno de los principales promotores de las inversiones de este grupo empresarial corporativo, al igual que el ex Ministro de Comunicaciones y pre candidato presidencial oficialista, Alejandro Sinibaldi.

Fue por ese apoyo de los gobiernos de turno que el 17 de abril de 2007, CEMPRO logró que el gobierno de Berger, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), le otorgara por 25 años la licencia SEXT-08-06 San José Mincesa, a Minerales Industriales de Centroamérica, S.A., para explotar 36 productos mineros en un área de 19 kilómetros cuadrados. Por otro lado, el 11 de noviembre de ese mismo año, la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez adjudicó a CEMPRO la licencia municipal para la construcción de la planta San Gabriel donde se fabricará el cemento, con un área estimada para su construcción de 64 hectáreas.

Las comunidades afectadas calificaron estas acciones de CEMPRO como despojo y el 13 de mayo de 2007, amparadas en el Convenio 169, organizaron y realizaron una Consulta Comunitaria de Buena Fe en la que rechazaron las operaciones mineras en sus territorios. Participaron una 8 mil 940 personas de las que 8 mil 936 expresaron su rechazo a la construcción de la fábrica de cemento y a la explotación minera en la finca San Gabriel Buena Vista, ubicada en las comunidades de San Antonio Las Trojes II y Santa Fe Ocaña.

Estos resultados fueron presentados a la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el MEM y al Congreso de la República. El gobierno de Colom, en lugar de respetar las decisiones y las demandas de las comunitarias y comunitarios, respondió con represión, y en el año 2008 implantó un Estado de Excepción, luego de violentos desalojos de vecinos de las comunidades afectadas.

⁶. Cementos Progreso (CEMPRO) es una industria monopólica de la producción de cemento en Guatemala. Por décadas ha sido favorecida con esquemas de protección.

⁷. En el actual gobierno, Camacho de Torrebiarte fue nombrada Comisionada Presidencial para la Reforma Policial.

⁸. Velásquez asumió como Ministro de Economía en el gobierno de Álvaro Colom, luego de haber sido Secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia.

De esa cuenta, tal como ha venido sucedido en otros territorios donde se han impuesto actividades extractivas de minería y petróleo así como la construcción de megaproyectos, el gobierno de la UNE y CEMPRO se aliaron para criminalizar, reprimir y perseguir a estas comunidades. Ese gobierno utilizó la fuerza policial y militar de manera desproporcionada y violenta ante las manifestaciones comunitarias. Los días 28 y 22 de junio de 2008, las 12 comunidades fueron tomadas por el Ejército en una operación en la cual intervinieron más de tres mil soldados y dos mil agentes policiales.

En este hecho, varias mujeres maya-kaqchikel fueron violadas, un crimen que a la fecha, ha sido silenciado. Las denuncias que las nueve víctimas presentaron en el Ministerio Público (MP), simplemente no han avanzado, y también varias lideresas y líderes han afrontado la persecución penal. Sus viviendas fueron allanadas por el MP, el Ejército y efectivos de la Gran Alianza Nacional (PNC) bajo la acusación de terroristas, de tráfico ilegal de armas, sabotajes, robo, homicidio y amenazas, entre otros.

Entre las personas sentenciadas por defender su territorio y la vida figuran la lideresa maya-kaqchikel, Reginalda Patzán, sentenciada en junio de 2008 a 43 días de cárcel acusada de participar en manifestaciones ilegales. De igual forma, el líder maya-kaqchikel Abelardo Curup, condenado en agosto de 2009 a 150 años de prisión bajo la acusación de tres asesinatos y al pago de Q. 2.5 millones por daños y perjuicios.

Continúan vigentes las órdenes de captura contra decenas de lideresas y líderes así como el establecimiento de brigadas militares en el área de la cementera. Amparado en estas disposiciones gubernamentales, Cementos Progreso ha allanado la propiedad privada de las comunitarias y comunitarios con el derribo de cercos y daños a cultivos y ha favorecido la creación de grupos armados que amenazan e intimidan constantemente a las familias, lideresas y líderes con vigilancia permanente. Hay trabajadores de la cementera que acosan y amenazan a las jóvenes en los caminos y en las calles; lideresas que reciben amenazas por teléfono; en las noches hombres desconocidos han distribuido boletines en las comunidades desacreditando principalmente a los alcaldes auxiliares y a los representantes de las comunidades.

Desde el gobierno de Berger fueron promovidas, bajo la gestión de Carlos Vielman⁹, ex Ministro de Gobernación de ese gobierno, la instalación de Juntas Comunitarias de Vigilancia de “carácter civil”, que con el transcurrir del tiempo se convirtieron en una especie de estructuras paramilitares que acosan a las comunidades.

A la par, la presencia de CEMPRO y sus mecanismos de instalación han promovido una desestructuración del tejido social comunitario así como división de las comunidades mediante:

- Compra y cooptación de liderazgos.
- Discurso de criminalización y antidesarrollo.
- Control, vigilancia, acoso y amenaza.
- Perspectivas de represión directa y atentados contra liderazgos y comunidades.

⁹ En la actualidad, Carlos Vielman Montes está privado de libertad en España, a la espera de un juicio por su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de siete reos en la cárcel de Pavón en septiembre del 2006. El director de la PNC de ese entonces, Erwin Sperissen fue condenado, en Suiza, a cadena perpetua, por el mismo caso.

El actual gobierno ha mantenido esa tónica. En el año 2012, ordenó la instalación de una Brigada Militar en el municipio para “guardar la gobernabilidad”. Un hecho que en la práctica es un mecanismo de control y acoso a la población comunitaria que se opone al proyecto cementero.

Luego, el 22 de mayo de 2013, Pérez Molina y Sinibaldi Aparicio inauguraron los primeros 28 kilómetros del llamado “Anillo Regional”. Este es un proyecto previsto desde la administración de Álvaro Arzú Irigoyen y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) -1996-2000-. Dicho tramo comunicará la carretera Interamericana con la carretera del Atlántico y tendrá un costo de Q. 140 millones, Q. 70 de los cuales serán aportados por CEMPRO.

Pese a que este proyecto ha sido promocionado como de utilidad pública y será construido, una parte, con fondos públicos, abiertamente ha sido calificado como una carretera al servicio de los intereses de esta corporación para unir dos de sus principales plantas de procesamiento: iniciará en el kilómetro 38.5 de la ruta Interamericana, atravesando los municipios de San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo, Chuarrancho y terminará en la ruta al Atlántico, en Sanarate, El Progreso, donde se encuentra la otra planta de esta corporación.

De ahí, el 5 de julio de 2013 CEMPRO hizo público el inicio de la construcción de la planta “San Gabriel”, y a la inauguración asistió Pérez Molina para colocar la primera piedra, bajo un despliegue militar significativo. En esta actividad también participó el Alcalde municipal, Fernando Bracamonte.

Esta acción causó descontento e indignación en las 12 comunidades y para manifestarse, realizaron una marcha de denuncia en la que participaron unas 12 mil personas e hicieron presencia distintos pueblos de Guatemala, autoridades comunitarias, asociaciones de mujeres, jóvenes, ambientalistas, organizaciones campesinas, etc.

Un día después de esa inauguración fueron capturados los líderes Mariano Camey Car, Margarito Camey Zet y Lorenzo Car Hernández, acusados de desestabilizar la ley y de actos terroristas, cargos que a la fecha no se han podido demostrar pero que obligaron a estos tres líderes a pagar una fianza de Q. 2,000 para obtener libertad condicional.

CEMPRO también promovió una demanda en contra de la columnista Francisca Gómez Grijalva, de Prensa Libre, por supuestas difamaciones en su contra. Gómez Grijalva escribió una columna en la cual opina en favor de la denuncia presentada por las comunidades de San Juan Sacatepéquez.

2.3 Algunos antecedentes de agresiones en San Juan Sacatepéquez por grupos clandestinos y paramilitares:

Luego del Estado de Prevención impuesto en Junio de 2008 se crean estructuras paralelas, conformadas por grupos paramilitares que realizan acciones desestabilizadoras a nivel local. Esta circunstancia se complica en un entorno enrarecido por la discusión mediática favorecida por la CEMPRO¹⁰ lo cual debilita la organización al interior de las localidades que resisten a la instalación de la planta cementera.

¹⁰. Cementos Progreso (CEMPRO) es uno de los más importantes anunciantes en los medios de prensa impresa, televisiva y radial. Esta circunstancia facilita el trato preferencial en el manejo de la información que pueda afectar a dicha empresa. Circunstancia que perjudica la libertad de prensa y la garantía de un ejercicio independiente de la labor periodística.

Luego del Estado de Prevención, la situación cambió en las comunidades. A partir de esos momentos se empiezan a conformar grupos paramilitares o clandestinos, supuestamente integrados por trabajadores de la cementera, quienes se han encargado en los últimos años de intimidar, atacar y controlar a las personas organizadas en la resistencia, utilizando figuras tipo las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Muchos de estos grupos operan impunemente en las diversas comunidades, y a decir de los vecinos hay presencia de varios ex militares al mando de estos.

“Con la proliferación de las rondas, organizadas en las denominadas Juntas Locales de Seguridad – JLS – o comités de seguridad se ha ido rescatando la visión contrainsurgente para el control poblacional, a lo cual San Juan no ha escapado. Muchas de las JLS han sido conformadas por los mismos líderes que participaron de las Patrullas de Autodefensa Civil – PAC –, o bien son ex – militares, de ahí su accionar violento y su forma de operar.

Con la participación de la población en violaciones contra comunidades vecinas, o incluso contra la suya propia, el peligro de represión anidó en el interior del tejido social. Algunos asumieron el discurso contrainsurgente y se convirtieron en partícipes activos de la represión, obteniendo a menudo ventajas económicas o políticas”.¹¹

El 2010 en particular fue un año difícil para las comunidades que se han opuesto a la instalación de la cementera, ya que los grupos paramilitares inician ataques sistemáticos.

Vecinos señalan que durante el Estado de Prevención:

“Ellos (las fuerzas de seguridad) no permitían que la gente salieran a comprar, a trabajar, nos dejaron encerrados, quince días estuvimos en nuestras casas...ellos ordenaron que nadie sale.

...policías y soldados en ese tiempo entraron a las tiendas y a comer, sin pagar ni un solo centavo, entrar en las casas y las mujeres están torteando y ellos lo que quieren es comida y tortilla pero a la fuerza le piden a las mujeres, y la mujer por estar asustada le da ...aquí a las seis de la tarde uno ya está adentro, ya no puede salir las demás horas de la tarde porque por ay a las seis y media, las siete ahí están patrullando los policías y soldados, dicen que si uno sale es delincuente y lo capturan, entonces este día ya uno tiene miedo, ya no puede salir, porque antes pues una mujer se va a ir a buscar su leña tiene libertad de entrar ahí en el monte, buscar leña, pero ahorita ya no, desde que la empresa entró, nosotros ya no podemos salir”¹².

De tal suerte que las comunidades opositoras al proyecto que les afecta directamente, han vivido varios años de asedio. Por lo tanto, debido a los continuos ataques y desestabilización de las aldeas y caseríos por parte de grupos paramilitares, la población acordó establecer postas o puestos de control en los accesos principales. Una acción que es muy distinta del rol de vigilantismo desarrollado por las juntas locales de seguridad creadas durante la gestión de Carlos Vielman, en el gobierno de Berger. Mismas

¹¹. CEH. *Guatemala Memoria del Silencio. Resumen del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico*. (Guatemala: Fundación Myrna Mack – PDH, 1999) Pág. 87 – 88.

¹². Declarante confidencial en Celada, Mario, Criminalización control social y represión de las comunidades en resistencia de San Juan Sacatepéquez y su lucha contra la cementera. Guatemala, 2011. Tesis de graduación, Escuela de Historia, USAC.

que derivaron en grupos paramilitares que utilizan capuchas o gorras pasamontañas para que no se les identifique.

Por otro lado, hay grupos vestidos de civil, integrados por personas que trabajan directamente para CEMPRO o perciben un incentivo por esta. Según las declaraciones de personas entrevistadas, estos grupos han cometido agresiones contra comunitarios. Es decir, la operación por parte de grupos paramilitares, refleja una forma de actuación sistemática para reprimir las expresiones de lucha popular, para el caso de las comunidades en resistencia de San Juan Sacatepéquez. Dichas formas de operar han sido básicamente las mismas, grupos de trabajadores de la cementera (en su mayoría de seguridad), vestidos de civil que han atacado reiteradamente a las comunidades, abonando el entorno de violencia y desavenencia social.

Aunque oficialmente se habla de procesos de diálogo con las comunidades, hay una gran desconfianza en los mismos en virtud de que mientras se dan estos procesos, las comunidades sufren de persecución, por parte del gobierno, la municipalidad y la empresa. Se desarrollan acciones de propaganda que buscan desacreditar a los líderes en el proceso de diálogo. Este elemento lleva a romper con dichas mesas, ya que en el discurso el gobierno y la empresa planteaban un diálogo para resolver la problemática pacíficamente, pero en la práctica criminalizan a los líderes, acusándolos de terroristas, otros tantos se encuentran encarcelados, y se empiezan a perpetrar los primeros ataques de grupos paramilitares, encabezados por militares retirados.

Otro factor que contribuye a la escalada de conflictividad es la militarización de hecho en el entorno. La misma se produce con la instalación de un destacamento militar y, con la presencia de militares en la finca San Gabriel.

Este fenómeno ha generado prácticas de vigilantismo al extremo de que se han involucrado vecinos de las mismas comunidades, quienes han servido de informantes para la cementera y las fuerzas de seguridad, vecinos señalan: "...iban a otra comunidad para que no los reconocieran y los de otras comunidades venían aquí, así se estuvieron, para reforzar a la policía y al ejército"¹³.

Varios ex – militares parecen se encuentran a la cabeza de agrupaciones que han atacado a las comunidades, o bien que dirigen las rondas como el caso del capitán, José Ovidio Castro. Es importante resaltar las provocaciones que estos grupos generan, según vecinos: "trabajadores de la empresa han venido o han llamado, bueno, tal persona está con la empresa dicen, pero son los mismos ellos, son trampas las que ellos se ponen, ah mire, si quiere nosotros lo eliminamos, no, no hay necesidad, qué les respondemos nosotros, no, no tenemos necesidad para hacer esto, la empresa les dice provoquen ustedes a la comunidad que les den riata ahí, que les den todo, o sea que ellos dan la vida por la empresa, ellos dan la vida."¹⁴

En unas ocasiones estos grupos utilizan ropa militar y en otras operan con el rostro cubierto. "son gentes particulares no son autorizados por el gobierno, no que es gente particular que está usando trajes (de militares), de dónde viene eso.....trajo gente de saber donde, están capacitados para hacer cosas malas, y esas ideas que otra gente trae le dieron a la gente de aquí, hace algunos días que vinieron unos los

¹³. Informante clave en, Celada, Mario, Op Cit

¹⁴. Informante clave en, Celada, Mario, Op Cit

amenazaron dice que ya había dado órdenes, no sé con quiénes va, si ustedes van a seguir con sus luchas pasaran cosas serias en las comunidades, nosotros ya no trabajamos solos, nosotros tenemos un montón de compañeros para que veamos mas algún día va a llover sangre en nuestras comunidades”¹⁵

La creación de grupos en el seno de las comunidades en resistencia, ha permitido generar mecanismos de inteligencia por parte de Cementos Progreso, logrando infiltrar a personas en reuniones y demás actividades realizadas por las doce comunidades: “Hacemos nuestras reuniones, platicamos, pero ellos ahí siempre van, escuchan y graban y después de ahí sacan volantes y tiran en la calle”¹⁶.

Imagen 2
Algunas muestras de agresiones a comunitarios.

Los grupos que han operado, generalmente no adquieren un nombre específico, sin embargo, algunos se han ido identificando y denominando de la siguiente forma:

Unidad Sanjuanera
Frente Democrático por la Justicia
Movimiento Francisco Tepeu
El Escuadrón

En las imágenes de la derecha se puede ver a algunos vecinos heridos por ataques de grupos paramilitares durante 2010



Fuente: Recopilación propia

2.3 Algunos testimonios de hechos previos en la conflictividad¹⁷.

Caso 1. Ataque armado de un grupo de cementeros previo a la visita del relator especial para los Pueblos Indígenas James Anaya. Lugar de los hechos: caserío San Antonio las Trojes I. Fecha: 2 y 5 de junio de 2010.

Los hechos:

¹⁵. Informante clave en, Celada, Mario. Op cit

¹⁶. Informante clave en, Celada Mario. Op cit

¹⁷. Fuente. Informantes clave en Celada, Mario Op. Cit

Perdimos un dinero de 23 mil quetzales. Un pierde hizo la comunidad, fue culpa de la empresa porque pagamos la maquinaria los camiones más los mano no calificada de los trabajadores como 2 mil personas y por eso todo esa pérdida de nosotros fue culpa de la empresa y cabal ahí conjuntamente como estamos con el alcalde regresamos nuestros camiones como a las 4 menos 25 cuando la camioneta venía para acá de la aldea y nosotros venimos como decía el alcalde vamos señores como el camión ya regreso vamos a la casa y cabal los trabajadores de la empresa están allá arriba donde esta la plataforma un poquito adelante cuando venimos nosotros es el primer alcalde más miembros, son 8 de nosotros, cabal bajaron la camioneta, fue los trabajadores y guardianes de la empresa y bajaron de la camioneta, que pasaron las mujeres gritaron cuando agarraron a nosotros, primero bajaron al primer alcalde "que pedimos del alcalde... muerte de una vez" decían los trabajadores de la empresa con los grandes machetes, armas de grueso calibre, ahí si a mi me zamparon...todo esa cara bien morada... ahorita ya está sanando y todo aquí en mi espalda me puyaron con machete... pero nosotros como decía somos gente pacífica, nosotros estamos llevando una lucha a través de Dios que ha dado... eso fue lo que paso el 2 de junio

Ataques 5 de junio de 2010

A las 8 de la noche nosotros hicimos nuestra asamblea cuando empezaron el grupo de la empresa, empezaron armas... tiros por acá tiros para acá... cómo saber qué clase de gente... nuestra gente nosotros metimos en la iglesia que no se fueron para sus casas, niños se asustaron, gritaron, todo enfrente de aquí del juzgado se llenaron con vidrios de botellas, leñas, fueron trabajadores de la empresa.

Ellos quieren la firma de nosotros para...no sé para qué sirve eso...no sé hasta el momento no sé para qué pero yo sí pensé ese rato esa firma si nosotros vamos a firmar ese papel lo van a trasladar a la empresa, eso es lo que quieren ellos, pero así como yo les digo no es posible porque no voy a vender mi comunidad no puedo vender mi dignidad ni mi pedazo donde estoy donde vivo, entonces no les dimos nada, y por eso viene el problema, nos señalaron pena de muerte. El 21 de marzo (2010), cuando dos compañeros, uno perdió un ojo, y el otro todavía tiene una gran cicatriz, aquí está ve (en la espinilla) como decía uno perdió un ojo, y él está en la casa sin trabajar y tenía 6 niños y quién va a cuidar esos niños, la verdad el papá solo en la casa en una silla está, ese pobre ha sufrido por qué, es culpa de la empresa y por eso nosotros estamos como voceros, estamos peleando por un derecho

Los ataques perpetrado en contra de la comunidad de San Antonio las Trojes I, tenía por objeto sabotear la visita del relator, ya que de haber logrado que se dieran hechos violentos, por razones de seguridad, o por el clima de tensión, probablemente se hubiera cancelado la llegada de J. Anaya.

Caso 2. Intimidación, ataques con arma de fuego e intento de secuestro de alcalde comunitario. Lugar de los hechos: caserío Concepción el Pilar I. Fecha: 16 de julio de 2010.

Los sucesos de la mañana:

Yo venía de la escuela con mi hijo y cabalmente estaba parado ese carro que lleva los arbolitos, le dijeron al señor que no lo iban a dejar pasar hasta que llegaran las autoridades, se molestó y bajo los arbolitos con su mano, los tiro en el suelo, dijo, voy a dejar esos arbolitos aquí, quien

quiera que se los lleve para su casa, porque ahí se juntó bastante gente, dijeron no queremos arbolito de la empresa, si queremos arbolito nosotros con nuestra mano vamos a hacer nuestra semilla y lo vamos a sembrar, porque así, arbolito regalado no queremos le dijeron al muchacho, pero él ya en la mente tiene, quiere hacer pasar que la gente bajó los arbolitos, ese rato él tomó foto a la gente que estaba ahí...nadie quiso agarrar los arbolitos...después dijo, mejor me lo voy a llevar y lo agarró y lo echó otra vez en su carro y después vino un compañero cementero de ellos y dijo qué está pasando...como esa gente no tiene trabajo, son bochincheros dijo el muchacho. Despues trajo un cuaderno el muchacho, el compañero de él, apuntando a la gente que estaban ahí, pero otros risa les dio porque él no sabe el nombre de todos los que estaban ahí, y así fue, al rato cuando el sintió molesto, no sé, pero el muchacho que lleva los arbolitos ya pasó... pero ese señor regresó a su casa... cuando vino lo está tirando como decimos nosotros bodoques, o cinco para onda, es lo que tiró..., entonces lo que hicimos nosotras, defendemos a los hombres...nosotras las mujeres lo correteamos, al ratito vino un su hijo, el hijo es el que trae el arma, y es el hijo que está trabajando en la empresa, salió el hijo disparando de la casa, ahí sí nos asustamos porque con armas ya no es juguete...

Hicieron un acuerdo para que se dejara pasar el pick-up con sus arbolitos, entonces así se quedo...fue a comunicar con otros trabajadores de la cementera, a los cinco minutos cuando esa persona se dejó pasar, llegó un trabajador de la cementera a disparar con arma, entonces ahí donde se dejó asustar muchas mujeres, niños, entonces así llegó el papá de ese chavo, también es netamente a favor de la cementera

Con esa arma de la empresa, está detenido un trabajador de la empresa hoy, está detenido, que también disparó ahí en el Pilar I, está detenido ahorita, por trasladar esa arma que la empresa le ha aportado, la información de él fue así, estamos cien por ciento seguros que la empresa sí los está utilizando de seguridad. Y cuál fue la versión de la empresa ahorita, que la empresa lo desconoce si es trabajador de él, no tienen ni contrato.

Sucesos durante la noche:

Convocamos con la gente a asamblea general para declarar qué es lo que sucedió en la mañana, empezando la asamblea, se acercó un grupo que de plano está a favor de la cementera...don A es uno de los compañeros, querían sacarlo cuando él ya tuvo el micrófono en la mano...unos participantes de la asamblea general, ya como tipo las diez, once de la noche, cuando regresó para su casa dice que ya está controlada, ya está controlada así, al momento para entrar a su casa ahí estaba gente ya... le golpearon duro su carro, vidrios todo, lo dejaron casi destruido en ese momento...lo agredieron por causa de estar con la gente ... en la asamblea pone la mano uno así pues yo opino así, opina uno pues, en eso es que no le pareció a ellos, este cuate opinó, siempre cada vez en la asamblea opina por eso ellos ya en la noche entrando a la casa le agredieron su pick-up.

Estábamos haciendo una asamblea y cabal esos señores vinieron a atacarnos aquí en la asamblea, supuestamente a mí me querían matar directamente, me agarraron, gracias al compañero llegó conmigo, ellos vinieron no sé qué intención, pero siempre nos provocan, hemos dicho no molesten a la gente, no molesten dejemos que ellos provoquen, y así hemos venido haciendo, pero esta vez unos no aguantaron y empezó la bronca y como decía a mí me querían, a mí me

agarraron, más para mí, me querían secuestrar porque me agarraron a la fuerza sino que él estuvo conmigo (señalando al compañero de al lado) me jaló y otras gentes que estaban me jalaron y lograron rescatarme... mi papá estaba en la casa y luego vino, tené mucho cuidado me dijo, porque ya rodearon la casa allá, como yo vivo como una cuadra para allá (señalando), empezaron a rodear mi casa, y empezaron los disparos al aire. Hay otro compañero con nosotros, él está conmigo y solo vieron que el compañero salió de la asamblea y luego mandaron gente para arriba a atacar su carro, aquí donde él vive, ahí lo tienen también rodeada su casa, según dicen, no me consta, pero dicen que ellos tenían un plan de quemar el carro del pobre muchacho... nosotros estamos en la auxiliatura y nos quedamos aquí casi toda la noche a las tres de la mañana nos fuimos para la casa, pero yo no fui a dormir a mi casa, yo fui en otra casa pues, y ahí están ellos rodeados y la mera verdad un se siente pues... en ese entonces me bajo mucho la moral, yo no he hecho nada, no les he hecho nada, nada, éramos amigos pues, es mi propia familia, no sé por qué será así, como dice el dicho, ellos se apartaron para allá, se fueron a favor de la empresa, entonces aquí se terminó el amigo, ellos para allá y nosotros para acá.

La empresa hizo otra estrategia ahorita, como aquí hemos dicho nosotros que estamos defendiendo la madre tierra, estamos defendiendo la naturaleza, estamos defendiendo el bosque, ya, entonces la estrategia de él, hizo un vivero, hizo un montón de plantas de pinito, eso está entregando los trabajadores de la empresa, y como la gente no quiere lo que es de la empresa, por eso fue que empezó esa bronca... Los trabajadores de la empresa vienen ahorita, por ejemplo viene... si yo fuera trabajador de la empresa y él es el otro, entonces yo le vengo a decir mira no querés agarrar los pinos, se compran las dignidades a las personas por un pinito. Yo tengo buenos amigos y esos amigos se fueron parte de la empresa, entonces se terminó el amigo, porque no va a ser que yo voy a estar aquí con él, y él me habla en contra de nuestra lucha que estamos haciendo, entonces él, todos los que son amigos se quedaron aquí y yo para acá, estamos entre amigos divididos, incluso en la familia tenemos dividido.

Los ricos lo pueden tener uno a menos, y eso no piensan esos pobres compañeros, y si se instala esa empresa no creo que todos esos trabajadores le dan trabajo allá, eso solo vienen gentes estudiados, y ya, pero ellos nunca lo piensan, y por eso nos quieren matar, porque yo el otro compañero, todos estamos amenazados de muerte...sí, hay rumores de matarme, porque como le vuelvo a repetir yo tengo mi trabajo aquí abajo tengo un poco de milpas, he sembrado, entonces le estoy dando al trabajo, entonces, ellos siempre buscan, como aquí es montaña todo pa' bajo, buscan donde acapararme, así dicen los rumores pero Dios primero esperemos que no pasa eso. Ya están denunciados, ya lo fuimos a denunciar ya, esperemos a ver qué responde le Ministerio Público... esperemos que eso también sale a luz, todo lo que nosotros estamos diciendo, porque ya muchas cosas nos han pasado aquí, como le vuelvo a decir yo luchó por mis hijos, qué futuro van a tener mis hijos de aquí en adelante.

Caso 3. Asesinato de Ilmer Orlando Boror, durante los bloqueos en el marco de la Movilización global por la defensa de la Madre Tierra. Lugar: Puente el Caminero. Fecha: 12 de octubre de 2009.

El hecho:

Ese señor yo lo conocí bien, bien, hizo sus tres vueltas ahí, pasó para abajo primero y después regreso, y después de regreso cuando lo volvieron a agarrar y que si él ya venía con esa

intención de hacer algo, empezó a discutir con los muchachos que estaban ahí, pero uno de Santa Fe Ocaña le hizo voltearse, decirle mirá, mejor ándate tranquilo, aquí con la gente no queremos ser violentos, por qué no te regresas tranquilo, bueno se calmó, pero el otro, no sé si les dijo otras palabras cuando se volteó y disparó, estaba como a 3 ó 4 metros a distancia de nosotros con él cuando disparó, pero uno se imagina qué es lo que él quería hacer, para qué estuvo con sus tres vuelta, uno se imagina o quizás hay rumores por ahí de que alguna de las veces que buscó está provocación, logró hacer algo, a la familia sí duele, esto sí duele, pero para nosotros es una victoria, es un camino más en el que tenemos que estar caminando, como decíamos nos dejaron como experiencia para también hacer vallas en donde se puede bloquear las calles o avenidas quizás por donde podemos estar, entonces ahí con nosotros estuvimos con velar a este compañero, se hizo ahí en el centro de Santa Fe Ocaña, ahí se hizo el velorio por ese compañero, ahí viene la diferencia de cómo puede la gente o puede la sociedad mantener a un compañero. Le doy la diferencia cómo hace la empresa con su gente, nosotros de las 12 comunidades, recolectamos un fondo en meter ese pobre finado Ilmer Orlando Boror, lo metimos en una tumba, que se quedó ahí, que este bien guardadito tal como su caminar con nosotros en la lucha, así lo hizo las 12 comunidades, lo hizo sepultar, lo hizo mantener de los gastos y todo, se está manteniendo a la familia, a la mamá, así se hizo con él. Pero la empresa con uno de sus trabajadores que lo asesinaron sus mismos compañeros, entre el puro lodo, ese día estaba lloviendo, en el puro lodo ahí lo socaron al compañero de ellos, entonces qué ventaja tendría uno de estar a la empresa si uno se muere, qué le interesa a él, si ama a sus trabajadores, lo coloca en el lugar que le corresponde, como los ricos hablamos, como de ellos, por el contrario ese pobre entre el lodo se quedó ahí, la diferencia que nosotros en una tumba lo colocamos, tal como se le merece, fue una experiencia, lo que ellos hacen para nosotros es una experiencia, estamos cien por ciento seguros que ese asesinato fue directamente hecho por la empresa. (Sobre el atacante) bajó las 3 veces a pie, 20 días después de esto haber sucedido, salimos de la reunión, en la oficina del CUC y se agarraron por esa avenida, salieron ahí por la florida, ahí nos señalaron de que aquí había dejado el carro el señor que mató al compañero, el carro lo tenía como a 2 cuadras, cuando él dejó disparando se huyó y esa calle cruzó para arriba, cabal ahí tenía el carro. La policía no hizo nada. Para nosotros fue mejor que ese señor se huyó, si se hubiera dejado que toda la gente lo atrapara, pedacitos, ni les alcanza a la multitud de gente, así de sencillo porque si se lo agarran, ya viendo con un compañero ahí tirado, no creo que alguien se aguante, bueno mucha déjenlo, no, esto a nosotros nos hunde, no es que nos rescata, sino que nos hunde, entonces todos dicen que gracias a Dios que ese se huyó, se salvó, porque esto hubiera pasado a mayor cosa.

Nos equivocamos un poco porque no se juntó a la mayoría de la población, no se fueron todos, se fue a hacer un tape ahí en el caminero, y cuando eso sucedió, la gente tal vez no se asustaron, sino que querían actuar en contra de lo que pasaba, porque cualquiera se altera en ese momento, en eso se tomó la decisión de caminar, se caminó otra vez hasta la casa presidencial, ahí se tuvo la reunión con el señor presidente, todo eso a nosotros nos llena de orgullo de que alguien ama la tierra donde vive y deja su vida por eso, acá estamos unidos y con esa familia lo estamos manteniendo, no al 100 por ciento, pero estamos al tanto de las necesidades que la mamá tiene, porque ya no tiene papá, solo él es el que está manteniendo a la mamá, por eso cualquier cosa la mamá siempre se comunica con las 12 comunidades, que necesito esto, nunca lo hemos negado porque es parte de nuestra lucha, lo tenemos que mantener hasta donde podemos, así hemos venido y gracias a Dios, la mamá se siente a gusto con las 12 comunidades de que sí le dan

aportes, les dan víveres y todo, así como estamos ahorita, casi todos sembramos, hacemos el trabajo y todo, la mamá se ha sentido feliz como si su hijo vive todavía, pero la verdad él ya no está con nosotros, pero la lucha de él si ha perdurado, y va a perdurar para siempre, es el único compañero nuestro que se ha... incluso hay algunos que han perdido, hay uno que le han sacado el ojo de un machetazo, pero son por parte de la empresa. Nosotros estamos tranquilos, más fortalecidos que nunca, podemos seguir adelante hasta donde, hasta donde la empresa nos deje en paz.

2.4 Algunos ejemplos de campañas de desprestigio e intimidación, realizadas en San Juan Sacatepéquez.

Imagen 3
Volante en el marco de campaña de difamación

UNIDAD SANJUANERA

Imagen 4

Volante con campaña de difamación

FRENTE DEMOCRATICO POR LA JUSTICIA

Es lamentable los sucesos que se están dando en la ciudad capital, no hay que quitar mérito a los representantes/delincuentes que dicen llamarse nuestros líderes, que a base de extorsiones y amenazas hicieron que muchos de nuestros amigos fueran a la marcha, repetimos, es innegable que han aprendido bien la lección, de las antiguas tácticas de la guerrilla. Instrucciones dadas por el CONIC (Juan Tinay), CUC (Daniel Pascual), Abogados Mayas (Mario Saper, Carmela Curul, Amilcar Pop), Fundación Menchú (nuestra insigne indígena experta, Rigoberta Menchú) y otros tantos grupos, buenos para nada. ¿O digámonos, que bueno han hecho estos personajes por nosotros los indígenas?

Es necesario que la comunidad internacional y la población guatemalteca sepan lo siguiente:

- Para que las personas asistieran, un grupo de hombres encapuchados que portando armas de grueso calibre, visitaron desde semanas atrás, todas las comunidades, anotando en cuadernos a todos aquellos que no irían a la marcha. ¡eso no es extorsión y amenaza! ¡algunos nos fuimos de nuestras viviendas, desde el domingo en la mañana, para no tener que asistir!
- Los que no podíamos o queríamos ir, tuvimos que pagar Q200.00 diarios para el fondo de estos delincuentes de Juan Zet, Osbaldo Car, Juan Antonio Saban, Vicente Raxon, Mario Nij, Elio Coloma, Leon Zet y otros.
- Los campesinos dicen ir en son de paz, pero al final de la marcha iba un pick up cargado con mochilas (pertenecientes a grupos organizados en cada comunidad) donde llevaban pistolas, hondas, piedras y cuchillos, en caso de no ser atendidos por el Presidente. ¡a eso se le llama pueblo pacífico!
- Dicen querer la libertad de los campesinos presos, pero ¡ellos son los responsables de la muerte de algunos de nuestros amigos! ¿Dónde está la justicia para esas familias de humildes indígenas?
- El fraile encapuchado, Armando González declaró durante la marcha que apoyaba un movimiento pacífico ¡por lo visto no le hecho una mirada al pick up, al final de la marcha!, además dice ser imparcial, ¿que clase de pastor de almas es? cuando días atrás visitó personalmente a todas las comunidades, para incitarnos a la lucha y a la violencia.
- Eso de pintar toda la ciudad capital, ¿es parte de lo que están aprendiendo los jóvenes indígenas? Solo están promoviendo las futuras maras de nuestras pacíficas poblaciones.
- Nos decían algunos amigos "tontos, que se prestaron a perder sus días de trabajo" que durmieron como animales, y no les dieron ni una tortilla.
- ¡los que dirigen el movimiento, dicen que están dispuestos a dialogar, pero eso es una total mentira, porque claramente lo ha dicho Juan Zet, no queremos dialogo, pero tenemos que aparentarlo!

Esas no se va a quedar así, porque aunque seamos indígenas, no somos tontos, y no nos vamos a dejar manipular y a quitarnos algunas oportunidades de trabajo y desarrollo.

"no a la violencia" Queremos dialogo, queremos escuchar, queremos propuestas, queremos la paz.

FRENTE DEMOCRATICO POR LA JUSTICIA

3. LOS HECHOS

3.1 Entorno inmediato.

Denuncias al MP. El uno de septiembre un grupo de personas del caserío Las Trojes uno, presentó denuncia ante la Unidad de Delitos contra activistas de derechos humanos, de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos. La denuncia, recogida en el expediente FDH-48-2014, expresa que el 29 de agosto en horas de la mañana, un grupo de trabajadores y líderes de la empresa Cementos Progreso obstruían (tapaban) el camino y amenazaban de muerte a quienes querían pasar. Entre los agresores, las víctimas identifican a Mariano Noj y Juan Pririr, quienes dirigieron al grupo que con palos, piedras y machetes hostigó al grupo que debió refugiarse en una vivienda cercana.

3.2 La información de lo sucedido.

En diversas entrevistas realizadas por la delegación de la Convergencia por los Derechos Humanos, entre las que se incluye a familiares de las personas muertas entre el viernes 19 y sábado 20 de septiembre, así como a Alcaldes Auxiliares y comunitarios de diversas comunidades se logra establecer una línea de tiempo que se detalla a continuación.

El viernes 19 aproximadamente a las 21:30 horas tres jóvenes (uno mayor de edad y dos menores de edad) venían caminando hacia su casa, el mayor de ellos luego de culminar su jornada laboral en una maquila de San Pedro Sacatepéquez se reúne con sus dos hermanos menores de edad y caminan, cuando de pronto aparece un grupo de alrededor de 15 personas, quienes les alumbran con linterna y sin intermediar palabras les disparan, producto de lo cual cayó el mayor de edad. Los otros dos hermanos menores de edad, huyen de la escena, uno de los cuales llega hasta la casa del Alcalde Auxiliar. El Alcalde Auxiliar al ver a los dos niños heridos acude al lugar donde estos le señalan que esta su hermano. El lugar es un callejón del Caserío Los Pajoques donde se encuentra tirado el hermano mayor y observa que tiene un impacto de arma de fuego en el pecho, frente a lo cual corre a solicitar un vehículo para que puedan llevar al joven a que le atiendan médicaamente.

Los otros dos hermanos, menores de edad están heridos, uno en el brazo izquierdo y el otro en un dedo de su mano. Por ese motivo, al encontrar vehículo que los traslade, suben al mayor con herida en el pecho y a los otros dos quienes son acompañados por su señor padre (José Dolores Pajoc Pirir). El joven herido con aparente proyectil de escopeta no logra llegar con vida al hospital dado que muere en el camino.

Al mismo tiempo, vecinos de Los Pajoques, al escuchar la detonación de armas de fuego y los gritos de los hermanos menores del, hasta ese momento, herido, salen de sus casas y llegan al lugar de los hechos. Mientras el vehículo que transportará a los heridos llega, uno de ellos identifica a quien presuntamente les disparó. El supuesto agresor responde al nombre de Felipe Patzan y aparentemente labora para Cementos Progreso S.A.

En este momento se hacen presentes dos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes levantan el parte policial de los hechos acontecidos y se retiran del lugar, en tanto que al momento se reportan

personas heridas. Aparentemente una de las oficiales presentes en la escena es una mujer que sería la responsable de la Sub-Estación 16-71 de San Juan Sacatepéquez de nombre Blanca Asencio. Luego de esto, ya pasadas las 22:30 horas la población concentrada se entera que el joven ha muerto, motivo que da inicio a la búsqueda de los aparentes responsables de la muerte y a quienes refieren como los trabajadores de la empresa cementera.

Los Alcaldes comunitarios y el Alcalde Auxiliar del caserío Los Pajoques llevan cabo varias acciones encaminadas a que la Policía Nacional Civil –PNC- se haga presente al lugar de los hechos, ya que Felipe Patzán y otros empleados armados se encuentran en la casa de Marcelo Pajoc y la población ha logrado rodear dicha vivienda. En ese sentido, las autoridades comunitarias realizan varias llamadas al teléfono de emergencias de la PNC (110). Estas llamadas las hacen desde el número telefónico 5761-8842. Ante la falta de atención pese a las reiteradas llamadas a la Policía, los alcaldes auxiliares llaman en varias oportunidades a las estaciones policiales de Mixco y San Pedro Sacatepéquez -en tanto municipios cercanos a San Juan Sacatepéquez-, las cuales también resultan infructuosas.

Paralelamente a estos hechos de solicitud de auxilio por parte de las autoridades comunitarias de Los Pajoques, vecinos de la comunidad Santa Fe Ocaña (la cual se encuentra justo a la par de Los Pajoques) se dirigen al centro de San Juan Sacatepéquez para pedir el auxilio en la Sub Estación 16-71, llamado al cual tampoco acude la PNC. Cabe señalar que comunitarios de Santa Fe Ocaña refieren que al hacerse presentes en dicha sub estación se encontraba en el lugar una persona de nombre Bernardo Tzen quien aparentemente es trabajador de la empresa cementera y a quien responsabilizan de que la PNC decidiera no llegar a la comunidad Los Pajoques.

Estos llamados reiterados de la comunidad a la Policía Nacional Civil jamás son atendidos como corresponde por parte de la misma, lo cual provoca en medio de la desesperación de las autoridades comunitarias y pobladores, realizar una llamada a un Policía que era habitante de la comunidad y que se encontraba asignado a un departamento distinto. Este elemento policial también realiza llamadas sin que rindan el fruto deseado.

Cabe señalar que la PNC mantuvo una excusa para no llegar a la Comunidad Los Pajoques pues argumentó que en un caserío cercano la misma, incluso en los ingresos, había bloqueos por parte de los pobladores. En una de las llamadas intercambiadas con la oficial a cargo de la sub Estación de San Juan Sacatepéquez, esta les dijo que no podían pasar porque en el caserío previo a llegar a Los Pajoques, se encontraba la talanquera cerrada. Frente a este hecho la alcaldía auxiliar se comunicó con sus homólogos en dicho lugar y estos negaron que la talanquera estuviera cerrada. Circunstancia que deja en entredicho el pretexto policial para no acudir al auxilio de la comunidad.

Estos esfuerzos no sólo provienen de comunitarios y autoridades locales, sino también se describe que los supuestos trabajadores de la empresa cementera, realizan llamadas a la Policía Nacional Civil con el mismo propósito. Así mismo, las personas que se encontraban dentro de la casa de Marcelo Pajoc llaman a la Procuraduría de los Derechos Humanos y estos le refieren que de igual manera se comunicarán con la PNC.

Paralelamente a estos insistentes llamados de auxilio, un grupo de la población enfurecida ha destruido varias casas, aparentemente todas propiedad de trabajadores de la empresa cementera, en distintos

puntos de la Comunidad Los Pajoques. También ha incendido un camión, dos pick ups y un vehículo sedan, aparentemente propiedad de la familia de Marcelo Pajoc.

Esas circunstancias se estaban desarrollando cuando el señor Justo Raxón quien se encontraba en su vivienda, junto a su esposa y tres hijos menores de edad, sale aproximadamente a la media noche a ver a sus sobrinos, quienes viven cerca de la casa de Marcelo Pajoc donde se están dando los hechos de violencia, para verificar la situación de estos. Otra vez suenan disparos y el señor Justo Raxú muere por un disparo en la cabeza. Este hecho exacerba aún más los ánimos de la población en tanto que presumen que los disparos vienen de dentro de la vivienda de Marcelo Pajoc.

Luego de estos hechos y al filo de las 6:00 de la mañana del sábado la población enardecida logra acceso a la vivienda donde se encontraban Marcelo Pajoc y su familia, Felipe Patzán y otros supuestos trabajadores de la empresa cementera. Al lograr el acceso estas personas son asesinadas por la turba, con excepción de Felipe Patzán quien, de acuerdo con un relato realizado por comunitarios, fue salvado por una persona de nombre Carlos Guamuch, quien interviene frente a la turba y logra que Felipe huya del lugar de los hechos. Según relatos de alcaldes auxiliares de Los Pajoques, hoy Felipe Patzán no solo acusa a quien aparentemente le salvo la vida, de dirigir los hechos del zafarrancho, sino que además acompaña a la Policía Nacional Civil, con una chumpa de estos, señalando viviendas e identificando personas.

Pese a los insistentes llamados durante la crisis, desde las nueve de la noche del viernes, la Policía Nacional Civil no llega sino hasta pasada las 10:00 am del sábado. Al medio día del sábado, la información disponible hablaba de siete personas fallecidas, dos del movimiento de resistencia y cinco del grupo de apoyo a la empresa cementera.

3.3 Lo recabado en la comunidad

Información obtenida en las visitas realizadas a las caseríos santa fe Ocaña, pilar I y II.

SANTA FE OCAÑA

Se obtuvo información sobre una reunión efectuada entre la Alcaldía Auxiliar de Santa Fe Ocaña con el comisario del Distrito Central de PNC Santiago Campos Gaitán y el Coronel Walter O. Sánchez, jefe del Comando de Rescate Humanitario del Ejército, en ésta, los comunitarios plantearon sus dudas sobre el Estado de Prevención y la presencia de las fuerzas de Seguridad.

Los comunitarios al tomar la palabra hicieron ver a las autoridades lo siguiente:

- Los hechos violentos fueron en el caserío Los Pajoques y no en Santa Fe Ocaña.
- Que un carro sin placas transporta a Luis Tepeu para identificar casas de líderes de las comunidades.
- Definición del tiempo que durará la presencia de policías y militares en el lugar.
- Exigen respeto de parte de policías y militares hacia las mujeres y niñas de la comunidad.
- Que no se confunda por parte de autoridades la costumbre de portar machetes y gorras y otros implementos de trabajo.

- Que se mantengan limpios los espacios donde permanecen las fuerzas de seguridad.

En tanto que el comisario del Distrito Central de la PNC Santiago Campos Gaitán y el Coronel Walter O. Sánchez L. indicaron a la población que no tenían órdenes de captura para ejecutar y que permanecerían 72 horas en el lugar, además de ofrecer “clases a los niños para qué no tengan miedo del ejército”.

En el acta que levantaron sobre la reunión se menciona que Autoridades Locales y mandos de PNC y Ejército estudiarán qué es un Estado de Excepción. Concluyen el acta a las 10:20 horas del día 22 de septiembre firmando autoridades locales, de PNC y Militares.

PILAR I

Se pudo observar un aproximado de 150 militares y 100 policías provenientes de las comisarías de Izabal, Huehuetenango, Jalapa entre otras. Según información proporcionada por autoridades locales, en la comunidad hay algunas casas en las que los policías reciben comida, y hacen uso de los servicios sanitarios. En estas casas residen personas que trabajan en la cementera y que además amenazan constantemente a la población en resistencia a la cementera y al anillo regional.

Por su parte las mujeres de la comunidad manifiestan temor por la presencia de militares en el centro del caserío debido a que en el año 2008 cuando por primera vez militarizaron el área, sucedieron abusos y violaciones sexuales que no fueron investigadas.

Así mismo exigen la retirada de los soldados y de la policía por que se sienten amenazadas y temen enviar a sus hijos e hijas a estudiar. Suspendieron sus actividades religiosas y evitan salir de sus casas. Al momento de conversar con las autoridades locales y alrededor de 20 mujeres, desde el interior de un pick up del ejército una persona que portaba uniforme militar y que en su charretera del lado derecho se podía leer España G tomo fotografías de un acompañante de PBI.

PILAR II

La presencia de agentes de PNC, soldados de PMA del ejército con equipo antidisturbios, así como de auto patrullas, es en el acceso principal al caserío Pilar II. Esto, después de que las autoridades locales dialogaran con los jefes del operativo para esa comunidad y acordaran que no permanecerían en el centro de la comunidad. A pesar de ello, muchos padres no enviaron a sus hijos e hijas a la escuela, en tanto que la celebración de una novena a San Miguel Arcángel fue suspendida.

Los comunitarios exigen que los policías y soldados no ocupen sus patios y parcelas pues producen basura que no limpian, además se quejan de que hacen sus necesidades fisiológicas en sus terrenos de cultivo. De igual manera que en Pilar II los comunitarios no tenían información sobre el Estado de Prevención. En ambos casos hubo necesidad de reproducir copias del Decreto 6-2014 para repartir entre los miembros de la auxiliatura.

Los Pajoques

Se visitó la casa donde se encontraron los vehículos quemados y se entrevistó al esposo de una de las familiares de la familia de Marcelo Pajoc. El señor comenta que, él no se encontraba en el lugar a la hora de los hechos, pero su esposa sí. La señora se encontraba presente y se le preguntó si nos podía relatar los acontecidos. Comentó que no sabía nada, que no se dieron cuenta de los detalles de lo sucedido porque no salieron de su casa y no saben nada.

El esposo intervino y comentó que con relación a los hechos trágicos que le ocurrieron a la familia de su esposa, el único culpable de esa situación era la empresa (Cemento Progreso) por que ellos habían ofrecido dinero y trabajo a sus familiares. Destacó que a partir de ello, estos ya no trabajaban la tierra y no hacían nada pero que siempre tenían dinero. Señaló que además, ahora estaban armados y molestando a la gente. Indica que Marcelo Pajoc (muerto en el zafarrancho), sin autorización vendió 60 manzanas de tierra, que eran propiedad de la comunidad, para la construcción de la carretera.

En ese momento interviene la esposa y llorando, dice que es cierto lo que dice el esposo. Indica que ella está muy triste por lo que pasó, pero, añade, la culpa la tiene la empresa, “nosotros vivíamos en paz antes de aparecer la empresa, la empresa puso a pelear entre vecinos”, agrega.

El segundo relato es de un comunitario que dice que ese día viernes todo estaba tranquilo hasta las nueve de la noche, aproximadamente, cuando empezó la bulla y se escuchó el llamado de los gorgoritos por todos lados. La gente se empezó a reunir frente a la iglesia y luego se trasladó hacia el lugar de donde provenían los disparos, más o menos a seis cuadras de la vivienda del declarante. Cuando llegaron encontraron a varios comunitarios heridos los cuales fueron llevados a centro hospitalario. Luego supieron que uno de ellos había muerto.

Refiere que la comunidad se ha vuelto peligrosa porque la gente de la cementera hace disparos por las noches. La población está cansada de escuchar disparos todos las noches por esta gente y las autoridades no hacen nada, reclama.

De los cinco asesinados, Miguel Pajoc Max,(29) Juan Rodrigo Pajoc (27), Jose Luis Pajoc (24), pertenecían a la comunidad de la iglesia católica, motivo por el que indica, la congregación está conmovida. Señala que le parece extraño que los jóvenes fallecidos trabajan para la empresa, pero también querían ser parte de la resistencia y llegaban a las reuniones. Dice que jugaban dos caras frente a los miembros de la iglesia.

Menciona, además, que Bernardo Pajoc Guamuch le permitió a Marcelo, su hijo mayor, la venta de 17 manzanas donde la comunidad siembra la milpa. Un terreno que, asegura, es propiedad de la comunidad. Señala que, además, vendió junto con otras 20 familias, 60 manzanas propiedad de la comunidad, para la construcción del anillo regional, sin contar con la autorización de la comunidad. Marcelo trabaja en la empresa y la comunidad señala que se aprovechó de su padre para vender esas tierras. La comunidad le había otorgado las escrituras de las tierras comunitarias a Bernardo para que posteriormente les cediera el derecho a los hijos de los comunitarios. Los hombres que dispararon primero se llaman Juan Augusto y Felipe Paxzan.

El tercer entrevistado es el padre de Juan José Pajoc, el primer asesinado. Señala que este venía en compañía de sus dos hermanos de 7 y 14 años de edad, de trabajar, como a las 9 de la noche.

Refiere que ellos dejaron su pick up a unas cuadras de la casa porque no podían entrar por el mal camino. Decidieron ir a pie y en una de las calles vieron que había hombres alumbrando con una lámpara y al ellos alumbrar también para ver de quién se trataba, estos les dispararon. Dice que a Juan le dispararon de frente con una escopeta y que además tenía otro orificio de bala que entró y salió por un costado del abdomen. Al hermano de 14 años le dispararon en el brazo izquierdo, en tanto que el pequeño salió corriendo para avisar que a su hermano le había disparado Felipe en el callejón. El niño también tiene una herida en el dedo meñique. Las gentes de los alrededores salieron de sus casas y encontraron a Juan en el suelo pero aún con vida. Refiere que un vecino se lo llevó a un centro hospitalario y que murió antes de llegar.

Las autoridades comunitarias junto con varios vecinos llamaron a la PNC para que se presentara pero esta puso de excusa que no podía por que había una talanquera que no los dejaba pasar. Los comunitarios le respondieron que estaba abierta. Al pasar el tiempo y la PNC no llegaba los volvieron a llamar y esta vez les respondieron que se encontraba cerca de San Pedro, cuando llegaron al lugar el presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), le llamó la atención a la jefa de la patrulla. Los comunitarios se enojaron por la actitud de la PNC. Indica que cuando llegaron, los comunitarios les exigieron que registraran la casa donde estaba la gente armada y disparando. Sin embargo, la PNC les dijo que solo tomarían el parte y que no podían ingresar por que no tenían orden de allanamiento y luego se marcharon.

La comunitarios le preguntan a los líderes qué van a hacer, porque es el primer muerto por causa de la empresa y ya no quieren más violencia. Las autoridades no pudieron convencer a la gente de que se calmaran. Pero la gente no se calmaba y ellos (los miembros de la autoridad comunitaria) les proponen retirarse a sus casas y que al día siguiente buscaran soluciones. Según indican, los alcaldes se retiraron como a las 23:00. Luego, escucharon que desde la casa de Marcelo Pacoc que es promotor de la empresa, estaban disparando.

El segundo fallecido por disparos desde la casa de Marcelo Pajoc es Juan Raxón. Según la esposa de este, él se encontraba en su casa y como a las cinco de la mañana del sábado, preocupado por los niños pequeños de un familiar cuya casa está cerca de la casa de Marcelo, decide ir a ver a los niños. Es entonces cuando le disparan en el cuello y muere como a las seis de la mañana. Un hijo le informó que ya estaba muerto. El disparo lo recibió en el cuello. Luego continuaron los disparos y al parecer allí es cuando la gente enardecida decidió sacarlos.

De los disparos también se reporta otros dos heridos.

REUNION CON ALCALDES AUXILIARLES Y MIEMBROS DEL COCODE

Indican que son cerca de 70 los pobladores comunitarios que trabajan para la empresa. Señalan que a estos la empresa les dotó de armas de fuego, mismas con las que han generado zozobra.

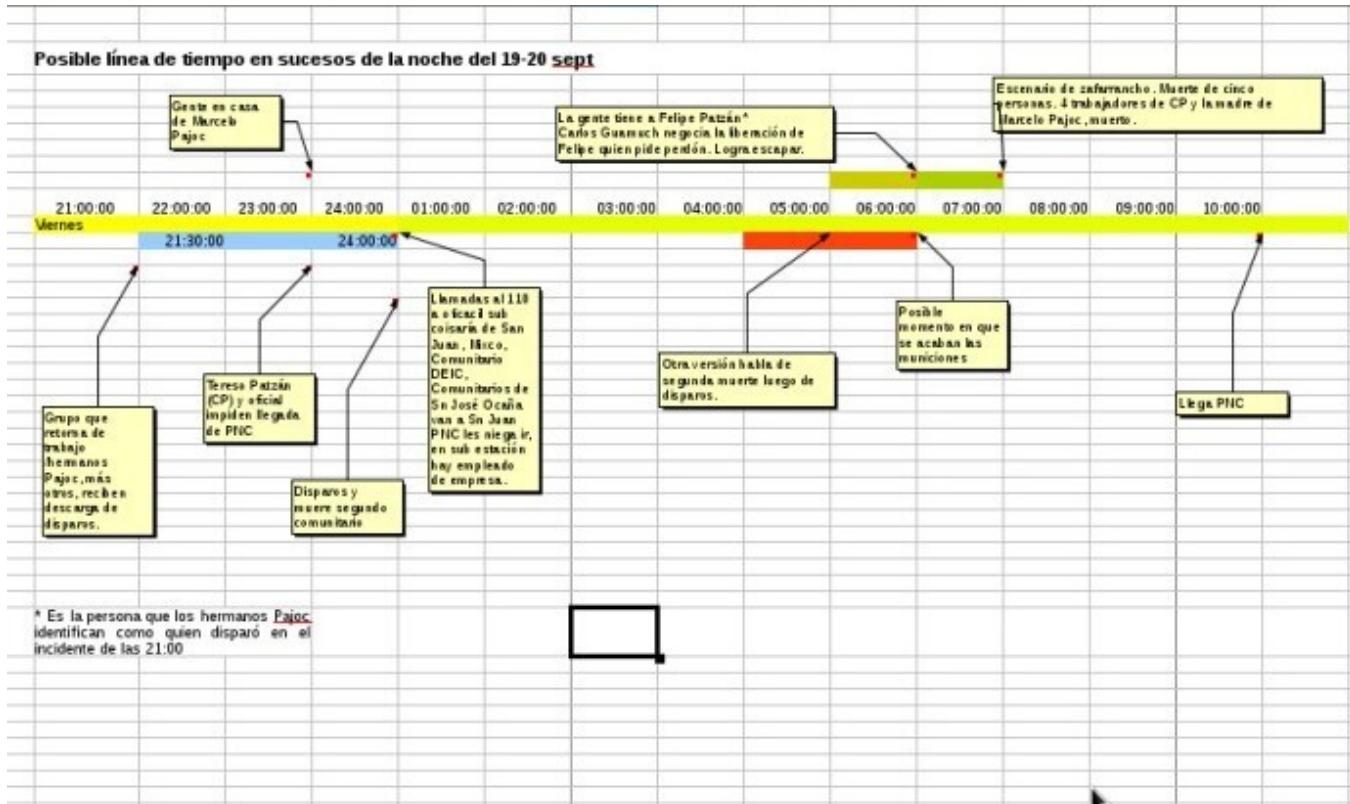
El primer incidente ocurrió a las 21:00 horas cuando los tres hermanos son interceptados por sujetos armados que al verlos les disparan sin mediar palabras. A uno de ellos le dieron un escopetazo de frente y un tiro al costado. Se trata de Juan José Pajoc quien murió antes de ser ingresado a un centro hospitalario en San Pedro. Su hermano tiene una herida en el brazo izquierdo y el otro en el meñique.

Luego de este incidente la gente se reúne y llama a la PNC la cual llega pero no captura a nadie, pese a las insistencias de que había gente armada. Se limita a recoger la información y se retira del lugar.

El segundo incidente ocurre entre las cero horas viernes y la una de la mañana del sábado. Indican que desde una casa de lamina les disparan cuando ellos se estaban retirando hacia sus casas después de conocer que Juan había muerto. En esta balacera hieren a tres comunitarios. Uno recibe un disparo en el cuello, otro en el brazo y el otro no saben en dónde. A estos se los llevan a un centro hospitalario.

El tercer incidente ocurre aproximadamente a las seis de la mañana del sábado cuando los que estaban en casa de Marcelo matan a Justo Raxón de un disparo en la cabeza. Raxón se dirigía a casa de un familiar para ver cómo estaban ya que vivían cerca de la casa de Marcelo.

IMAGEN 4 PROBABLE LÍNEA DEL TIEMPO EN LOS HECHOS



3.4 Versiones de otros actores

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) indicó la mañana del sábado 20 que había interpuesto recursos de exhibición personal en favor de cuatro personas retenidas. Dicho recurso no se ejecutó por temor de las autoridades quienes indicaron no haber condiciones para presentarse al lugar. Luego el PDH informó de cuatro fallecidos en la casa de Marcelo Pajoc. Al parecer, no había verificado las

muertes previas al conflicto. Indicó que la crisis se había generado por una discusión en un expendio de licor. La misma versión está contenida en el documento circulado por la empresa Cementos Progreso.

María Pajoc Max, habitante en la casa de Marcelo Pajoc, declaró a Prensa Libre que cuando los encapuchados armados entraron a su vivienda ella se escapó y huyó por las montañas con los niños. La PDH informa haber atendido a esta persona con los niños y niñas que le acompañaban. De acuerdo con versiones que la delegación no pudo confirmar oficialmente, mismas que a la fecha no se han presentado tampoco al público, las mujeres y niñas tenían el cabello cortado a la fuerza. También indicaban que había señales de que habían sufrido rozadura de chichicaste (una planta abrasiva) en la vulva¹⁸.

El Ministerio de la Defensa informó el 28 de septiembre que había encontrado un túnel, mismo que iniciaba en la vivienda de Marcelo Pajoc. En declaraciones a la prensa, el ente castrense indicó que dicho túnel también podría haber servido como depósito de armas. Esta circunstancia confirmaría las versiones comunitarias de la relación entre los grupos paramilitares y personal al servicio de la empresa cementera.

3. 5 El rol institucional

3.5.1 Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)

De acuerdo con los testimonios y la propia verificación de la delegación de CDH, la PDH no ha realizado verificación de los hechos de violencia detonadores de la crisis que derivó en el zafarrancho de la madrugada del 20 de septiembre. Su rol ha estado en el acompañamiento a las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento de la realización de la visita, no había recogido la versión de las comunidades afectadas por la construcción del anillo metropolitano ni de los familiares de las dos personas de las comunidades asesinadas antes del zafarrancho.

3.5.2 Ministerio Público (MP).

Durante la misión no se observó presencia física del MP en las comunidades. No había evidencia de que se hubiera procesado escena de los sucesos.

3.5.3 Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil (PNC)

Ministro de Gobernación en declaraciones a la prensa informando de la existencia de 72 órdenes de captura que, indicó, serían ejecutadas en el marco del Estado de Excepción.

¹⁸ El corte de cabello y la agresión con chichicaste es un tipo de tortura utilizado como práctica de militares en la etapa de la contrainsurgencia. Las mujeres mayas utilizan el cabello largo y el corte o “tuzeo”, es una manera de agredir su identidad. En el caso de la tragedia en San Juan Sacatepéquez no había confirmación de que esto se hubiera producido pero la versión la difundió la compañía cementera y la PDH.

Viceministro de Gobernación, Eddy Juárez, insistiendo en los medios de comunicación que había cinco bloqueos en los accesos al caserío Los Pajoques, circunstancia que la misión verificó no es verdadera.

Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC). Presencia apreciable en las cuatro localidades, con operaciones de rastreo físico territorial así como, interrogatorios a Alcaldes Auxiliares y Comunitarios.

Presencia de miembros de PNC en despliegue territorial en los cuatro caseríos visitados. No se sabe si porque ya hay un nivel tal de militarización de la PNC o porque se trata de miembros de las Fuerzas Armadas que visten uniforme policial, la actitud y lenguaje plástico de los elementos con uniforme PNC es ostensiblemente militar.

Tal y como se indica en la narración de los hechos del 19 y 20, tanto el teléfono 110 como las subestaciones de San Juan Sacatepéquez y Mixco, recibieron llamadas urgentes de varios grupos en Los Pajoques y Santa Fe Ocaña, sin que la autoridad policial respondiese al llamado de auxilio. Tampoco lo hizo cuando fue visitada la sub estación de la cabecera municipal, por una delegación de Santa Fe Ocaña, la cual pedía auxilio para el caserío Los Pajoques, a solicitud de los alcaldes auxiliares.

3.5.3 Ministerio de la Defensa Nacional

Con presencia física en el municipio desde 1972 cuando se trasladó la Escuela Politécnica (Academia Militar de Guatemala), de la ciudad de Guatemala a terrenos en San Juan Sacatepéquez.

Durante los estados de excepción decretados por el gobierno de Álvaro Colom, como entidad responsable del lugar.

Posteriormente, durante el actual gobierno, cuando se instala un destacamento militar en la zona, amplia su infraestructura y presencia física territorial.

En el marco del Estado de Prevención decretado por el gobierno a partir del 22 de septiembre del corriente año, a cargo de la representación gubernamental. En este contexto, con despliegue que le garantiza control territorial total en cuatro comunidades. Si bien el acuerdo que da vida al Estado de Excepción abarca a todo el municipio, la presencia de fuerzas de seguridad con control territorial visible es únicamente en las comunidades de Los Pajoques -sitio de la tragedia-, Pilares I y II y Santa Fe Ocaña (zonas de ubicación del principal liderazgo de oposición a la cementera y al anillo regional).

La observación realizada permite identificar una proporción de elementos militares con respecto de PNC de dos a uno. La unidad antidisturbios presente en el sitio es de la Policía Militar (PM).

3.6 Otros actores

3.6.1 CEMPRO

Como se indicó, es un actor cuyos intereses están en juego ante la inversión para construir una nueva planta y por la construcción del llamado anillo metropolitano que comunicaría las dos instalaciones propiedad de la empresa, distantes en casi 70 kilómetros. Sus intereses por lo tanto, están directamente comprometidos en el inicio, sostenimiento y desenlace de la crisis de conflictividad. La planta de cemento que se construye desde 2013, pese a la objeción manifestada en la consulta de buena fe, representa una inversión de US \$720 millones.

3.6.2 Asociación de abogados mayas

Una organización integrada por abogados y abogadas mayas de diferentes pueblos. En la misma participan abogados maya-kaqchikel. Han ofrecido auxilio legal a las 12 comunidades opuestas al proyecto de la cementera y la construcción del anillo regional. Dos de sus principales representantes han sido señalados públicamente por la compañía cementera de influenciar al liderazgo comunitario. Uno de los miembros de la asociación, el abogado k'eqchi' Amílcar Pop, diputado al Congreso, es incluido en la lista de señalados.

En el documento “Resumen de los hechos en Los Pajoques”, producido por la empresa de cemento, así como en declaraciones de su gerente general, José Raúl González Merlos, se acusa al diputado Pop de haber haber requerido la lista de quienes venderían terrenos para la construcción del anillo metropolitano. En el documento se incluye como anexo copia de la carta enviada por el congresista en ejercicio de la Ley de Acceso a Información Pública. Sin embargo, la lectura de dicha carta evidencia que en ningún momento el legislador solicitó detalle de nombres o lista alguna.

3.6.3 Organizaciones sociales

Comité de Unidad Campesina (CUC). Es una organización fundada en los años 80 del Siglo XX. Reúne a organizaciones comunitarias de todo el país, principalmente de origen maya. Forma parte de alianzas como la Marcha Campesina y otras que respaldan los movimientos de resistencia a proyectos extractivos. Tienen presencia fuerte en San Juan Sacatepéquez. Su principal representante, Daniel Pascual, ha sido acusado por la compañía cementera de promover la conflictividad.

Brigadas de Paz Internacionales (PBI). Es una entidad internacional por la paz y la no violencia, que ha brindado acompañamiento en protección del derecho a defender derechos humanos.

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA). Organización defensora de Derechos Humanos que verifica la situación de defensores y defensoras y su derecho a defender derechos humanos. Ha realizado verificación y sistematización de agresiones y ataques a defensores en su legítimo derecho a defender derechos.

Produce informes regulares de la situación de defensores y defensoras a nivel nacional, lo cual incluye la situación en San Juan Sacatepéquez.

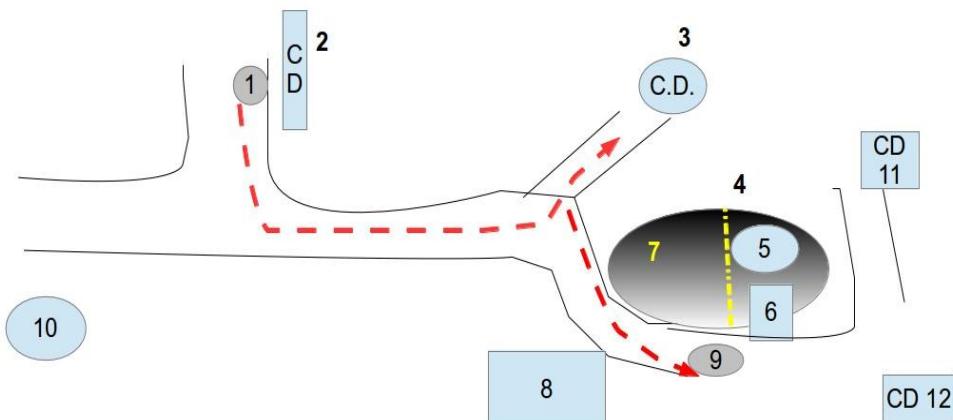
3.6. 4 Otros grupos

Fundación Contra el Terrorismo (FCT). Entidad fundada legalmente en 2013, integrada por militares en situación de retiro así como familiares de militares, todos activos durante la campaña contrainsurgente. Su principal representante es el hijo de quien fuera comandante de la zona militar de Cobán, Alta Verapaz¹⁹ y luego Ministro de Gobernación durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt. Si bien esta organización no ha tenido presencia en la zona, por medio de sus redes sociales y publicaciones ha contribuido a la estigmatización del liderazgo comunitario. El 25 de septiembre, durante la audiencia de primera declaración de los detenidos en Los Pajoques, la FCT se presentó al juzgado y pidió ser incorporada al proceso en calidad de querellante adhesivo.

Imagen 5
Croquis del posible desarrollo de los acontecimientos

Leyenda

1. Muerto comunitario	9. Muerto, 2º comunitario
2. Casa Destruida	10. Sede auxiliatura. Escuela
3. Casa Destruida	11. Casa destruida
4. Terreno Marcelo Pajoc	12. Casa destruida
5. Casa destruida. Muertos Marcelo Pajoc y familia	
6. Galera	
7. Terreno baldío, ocupado por Ejército y PNC	
8. Vehículos incendiados, vivienda de familiar Marcelo, entrevistado	



Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada.

¹⁹ El presidente de dicha Fundación Ricardo Méndez-Ruiz Valdez, fue pilar en la campaña de difamación contra la ex fiscal general Claudia Paz y Paz a quien siempre ha sindicado de ser “guerrillera”. Méndez-Ruiz Valdez indicó que su objetivo era impedir que su padre, comandante de la zona militar mencionada entre 1981 y 1982, sea llevado a juicio por las muertes de más de 500 personas cuyos cuerpos han sido exhumados de dichas instalaciones militares.

De acuerdo con los reportes recibidos, lo que apreciamos es que en el sitio que fue muerto el primer miembro de la comunidad se inició la persecución contra los agresores. Estos huyeron hacia la casa de Marcelo Pajoc en donde se atrincheraron. Aquí se produce la segunda muerte y da inicio el zafarrancho que deriva en la muerte de Marcelo Pajoc y familia, así como en la destrucción del resto de viviendas.

4. DERECHOS VIOLENTADOS

De acuerdo con la observación realizada y con base en la información disponible, consideramos que fueron violentados:

4.1 Derecho a la vida. Personas que murieron por los hechos del 19 y 20.

VÍCTIMA	POSIBLE AGRESOR
Juan José Pajoc Chajaj	Felipe Patzán
Justo Raxón Chojón	Alguien desde la casa de Marcelo Pajoc
Marcelo Pajoc Matz	Turba enardecida
Édgar Giovanni Pajoc Iquic	Turba enardecida
Bernardo Pajoc Guamuche	Turba enardecida
Juan Rodrigo Pajoc Matz	Turba enardecida
Miguel Augusto Pajoc Matz	Turba enardecida
José Luis Pajoc Matz	Turba enardecida

4.2 La integridad. Personas que sufrieron heridas, golpes o algún tipo de tortura.

VÍCTIMA	TIPO DE VIOLACIÓN	POSIBLE AGRESOR
Cecilio Raxón Max	Fractura brazo izquierdo por proyectil	Felipe Patzán

VÍCTIMA	TIPO DE VIOLACIÓN	POSIBLE AGRESOR
Hermelindo Pajoc Chajaj	Herida por proyectil, brazo izquierdo	Felipe PAtzán
Damián Vicente Canel	Herida por esquirla en antebrazo izquierdo	Felipe Patzán
Carlos Pirir	Herida de bala	Felipe Patzán
Genara Matz	Heridas, golpes	Turba enardecida
María Edilberta Pajoc Matz	Heridas, golpes	Turba enardecida
Juan José Pajoc Choy	Heridas por perdigones	Felipe Patzán
Población infantil que asiste a escuela en caserío Los Pajoques	Tortura psicológica derivada del temor por los hechos trágicos y la fuerte presencia militar.	Compañía cementera. Ambos grupos enfrentados. Gobierno de Guatemala.

4.3 A la seguridad. Personas que no pueden ejercer sus derechos con garantía de ausencia de riesgo o amenaza.

VÍCTIMA	TIPO DE VIOLACIÓN	POSIBLE RESPONSABLE
María Pajoc Max	Desplazamiento forzado	Grupo de Marcelo y turba enardecida
Varios niños y niñas no identificados	Desplazamiento forzado	Grupo de Marcelo y turba enardecida
Población de Negación de auxilio por Ministro de		

VÍCTIMA	TIPO DE VIOLACIÓN	POSIBLE RESPONSABLE
caserío Pajoques	Los parte de PNC	Gobernación y Policía Nacional Civil.
Población de San Juan Sacatepéquez	El estado de excepción decretado limita sus derechos de reunión y manifestación.	Gobierno de la República
Habitantes de caseríos Pajoques, Pilares I y II, Santa Fe Ocaña.	Además de los limitados por el estado de excepción que padecen todos los del municipio, están limitados de la libre movilidad sin temor, por la ocupación territorial del Ejército.	Gobierno de la República. Ejército de Guatemala y PNC.

4.4 Al patrimonio. La destrucción de cinco unidades habitacionales, así como menaje de casa y el incendio de cuatro vehículos. Responsabilidad directa de turba enardeceda.

5. CONCLUSIONES

- La conflictividad social ha escalado permanentemente sin que el Estado contribuya a procurar un clima de transformación del conflicto en condiciones de equidad para todas las partes involucradas.
- Resultado de ese escalamiento son los hechos trágicos que representaron el asesinato de dos jóvenes, heridas a otros, la masacre de un núcleo familiar, el desplazamiento forzado de por lo menos un núcleo familiar (niñas y niños incluidos), así como la pérdida de su patrimonio.
- Esa falta de atención y de cumplimiento de las responsabilidades del Estado se expresan en la falta de investigación de las denuncias presentadas por las comunidades afectadas, sobre el rol de personas armadas que intimidan a las y los pobladores, así como la relación de las mismas con la empresa cementera cuya llegada coincide con el inicio de la conflictividad.
- El escalamiento de la conflictividad pudo evitarse si el Estado hubiese cumplido su papel y aportado a la solución justa y no parcializada de la problemática. La criminalización de la resistencia pacífica es un factor que alimenta la conflictividad social. El recurso exclusivo de la ley contra un actor en desventaja de poder, cuestiona la legitimidad del actor estatal.
- El Estado tampoco ha analizado la responsabilidad de la compañía de cemento y las denuncias constantes sobre acciones encaminadas a dividir a la comunidad.
- La tragedia del 19 y 20 de septiembre pudo haberse evitado. El Estado de Guatemala y sus instituciones involucradas directa o indirectamente en la problemática, a lo largo de los años, tienen responsabilidad en los hechos sucedidos. En el caso concreto de los hechos trágicos, la Policía Nacional Civil (PNC), sus autoridades y el Ministerio de Gobernación, incumplieron sus deberes y al negar auxilio a todas las partes que lo pidieron, tiene responsabilidad en los sucesos.
- El Estado y sus instituciones continúan actuando con parcialidad en los hechos. No hay disposición ni siquiera a identificar a las víctimas de todos lados. Las autoridades han resaltado la tragedia vivida por la familia Pajoc Matz, pero han invisibilizado las otras muertes ocurridas, lo cual traslada un mensaje preocupante sobre víctimas de distintos niveles y eleva el nivel de ilegitimidad de la institucionalidad del Estado.
- El tejido social en las comunidades afectadas está dañado debido a las prácticas de cooptación monetaria y de armamentismo, promovidas por la empresa cementera, un actor que ha utilizado sus recursos para estimular la crisis y la confrontación.
- Los hallazgos de túneles y depósitos de armas en la vivienda de Marcelo Pajoc, desde donde se produjeron los disparos, es un indicador de la existencia de grupos paramilitares que operaban integrados por personal de la empresa cementera.

6. RECOMENDACIONES

- A la Convergencia por los Derechos Humanos. Hacer público este informe, a fin de dar a conocer una versión completa y no parcializada de los hechos ni alimentadora del discurso de odio y estigmatización social.
- Continuar el monitoreo de las acciones del Estado en el marco del estado de excepción. Auditarse y fiscalizar el cumplimiento de los estándares en materia de Derechos Humanos.
- Hacer requerimientos de Acceso a la Información para determinar con precisión las responsabilidades en materia de negación de auxilio.
- Investigar los patrones de comportamiento provocador y estímulo de la conflictividad en espacios de tensión social, a fin de identificar patrones que perfilen actores comprometidos en la generación de violencia.

ANEXOS

Al presente informe se anexan:

- a) Fotografías tomadas por la delegación de la CDH para la verificación.
- b) Documentos de interés para la comprensión de la problemática en el área, tales como reportajes.
- c) El documento circulado por la compañía cementera con su versión de los hechos.
- d) El comunicado cuyo origen tiene autoría similar con los documentos producidos en el SNDP.

BIBLIOGRAFÍA

Celada, Mario. Criminalización control social y represión de las comunidades en resistencia de San Juan Sacatepéquez y su lucha contra la cementera. Guatemala, 2011. Tesis de graduación, Escuela de Historia, USAC.

Cementos Progreso Resumen de hechos Pajoques. Sep. 2014. Documento PDF. Guatemala.

El Periódico Ediciones del domingo 21, lunes 22, martes 23, miércoles 24 de septiembre de 2014.

Revisión de portales electrónicos, sábado 20, domingo 21, lunes 22, martes 23, miércoles 24 de septiembre de 2014

Gobierno de Guatemala Decreto Gubernativo 6-2014. Diario de Centro América, 22 de septiembre de 2014. Guatemala.

Lederach, Jean Paul Enredos, pleitos y problemas. Una guía para resolver problemas. Bogotá, Clara 1997.

Lederach, Jean Paul y Marcos Chup. ¿Conflicto y violencia? ¡Busquemos alternativas creativas! Bogotá, Clara-Semilla 1995

Municipalidad San Juan Sacatepéquez Monografía de San Juan Sacatepéquez. 2010

O. J. D'Adamo – M. Calabró Fases y dinámica de los conflictos. Las racionalidades subyacentes. Disponible en: <http://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N16-1.pdf>

Pérez, Alejandro Dos funerales y muchas dudas. Disponible en: www.plazapublica.com.gt/content/dos-funerales-y-muchas-dudas

Prensa Libre Ediciones del domingo 21, lunes 22, martes 23, miércoles 24 de septiembre de 2014.

Revisión de portales electrónicos, sábado 20, domingo 21, lunes 22, martes 23, miércoles 24 de septiembre de 2014

SF Comunicado de Víctimas de San Juan Sacatepéquez, 24 septiembre 2014. Documento Word. SNDP-11.

Véliz, Rodrigo Alianza entre flores y exportadores, en un hilo por una industria . Nómada, Guatemala. sep. 2014